
Diversificación y reconfiguración de los sistemas de partidos de las democracias postindustriales * **

Herbert Kitschelt

Desde el final de la II Guerra Mundial hasta nuestros días los sistemas de partidos tradicionales se han desmoronado o, cuando menos, han sufrido grandes cambios. En este artículo describo este cambio, expongo sus causas y explico cómo han operado para llegar a modificar los sistemas de partidos tradicionales. Las preferencias políticas de los ciudadanos surgen principalmente, aunque no sólo, a partir de la inserción de los ciudadanos en el mercado de trabajo, la familia y las organizaciones empresariales. El proceso de postindustrialización y los cambios impuestos al desarrollo de los estados del bienestar han dado lugar a diferentes pautas y trayectorias que han influido y continúan influyendo en la distribución de preferencias políticas de los ciudadanos. En el nivel macro, ha habido un cambio en los ejes de la distribución de preferencias políticas: en dos fases distintas, se ha pasado de la prioridad del eje de las políticas distributivas (derecha-izquierda) a la del eje de las estructuras de gobernanza sociocultural (autoritario-liberal). Estos cambios en los ejes de preferencias tienen implicaciones para las estrategias de los partidos políticos. Los partidos son sensibles a las preferencias de los ciudadanos, como lo prueba el descenso del clientelismo, y en consecuencia se adaptan a sus cambios, siempre dentro del margen de posibilidades que les ofrece la estructura social, su propio historial partidista y, por supuesto, las condiciones económicas restrictivas y la crisis de los estados del bienestar vigentes. Como consecuencia de este proceso los sistemas de partidos se han complejizado y se han diversificado, dejando en manos de los movimientos sociales y los grupos de interés amplios ámbitos de actuación: toda la serie de temas y ámbitos de competición electoral que no pueden interpretarse dentro del espacio definido por los dos ejes de distribución de preferencias que rige la competición partidista.

Palabras clave: sistemas de partidos, competición partidista, preferencias políticas, divisiones políticas, dimensión izquierda-derecha, estado de bienestar.

* Una versión anterior de este artículo se presentó en la conferencia sobre «Accountability and Representation in European Democracy», que tuvo lugar en mayo de 2003 en el Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University.

** Traducción de Eduard Bonet.

Las grandes teorías sobre el cambio político y social en el capitalismo avanzado, como las que propusieron en un principio Daniel Bell o Alain Touraine en la década de 1960, acertaron al predecir un cambio radical de alineación de los intereses políticos y de las prácticas de participación política en la transición de sociedades industriales a postindustriales. Naturalmente, desde la posición ventajosa que nos confieren otros cuarenta años de innovación tecnológica, crecimiento económico y confrontación política, muchos de los pormenores de sus originales visiones han devenido poco convincentes. Sin embargo, dos de sus predicciones superan el examen del paso del tiempo. En primer lugar, hemos observado de hecho el fin de la política de clases, concebida como un marco de clases marxista y binario, aunque no el fin del conflicto distributivo en la política del capitalismo postindustrial. En segundo lugar, tal y como predijera Bell, y especialmente Touraine, la política ya no gira tan solo alrededor de acuerdos sobre quién obtiene qué, cuándo y cómo, sino también acerca de las estructuras de gobernanza de la organización social y los estilos culturales de vida. La política postindustrial está ciertamente plagada de conflictos sobre el control del comportamiento individual y colectivo —qué tipo de autoridades y de qué clase de poderes regulativos están dotadas para determinar los estilos de vida de los individuos, y cómo los ciudadanos pueden ejercer sus habilidades y sus derechos para participar en decisiones colectivas vinculantes—. Todo esto ha contribuido a la reconfiguración, cuando no al desmoronamiento, de los sistemas de partidos tradicionales, de modo que los partidos convencionales han tenido que redefinir sus mensajes programáticos y, bastante a menudo, han irrumpido con éxito nuevas siglas partidistas en la competición electoral. En este proceso, los partidos orientados hacia los intereses de la “clase obrera” han desaparecido. En el plano teórico, las concepciones tradicionales de la estructura social que dividen jerárquicamente a la población en una clase obrera manual de cuello azul y un estrato medio de cuello blanco han perdido su capacidad analítica para el estudio de la movilización política. Pero los partidos políticos no se han transformado en partidos “catch-all”, en el sentido previsto por la crítica melancólica de la democracia pluralista influida por la Escuela de Frankfurt (Kirchheimer, 1966), sino que expresan, representan y resaltan unas nuevas líneas de división relacionadas con la distribución económica y con las estructuras de gobernanza político-cultural que requieren una caracterización y una explicación analíticas. Al mismo tiempo, la participación política se ha extendido ampliamente más allá del reino de dominio de los partidos. El mismo conjunto de mecanismos sociales y políticos que han llevado a la reconfiguración de los sistemas de partidos también han promovido la diferenciación en los modos de acción política.

En las páginas siguientes intentaré ofrecer algunas justificaciones, sin entrar mucho en detalles, para este conjunto de afirmaciones directas. Empezaré desde una perspectiva sociológica sobre la formación de preferencias políticas en la sociedad postindustrial como algo exógeno al *actual* proceso político y a la formación de las políticas, aunque endógeno a las consecuencias acumulativas de anteriores decisiones políticas, princi-

palmente, en este caso, al desarrollo de los estados del bienestar. A partir de este espacio, constituido exógenamente, de distribuciones de preferencias relevantes, pasaré a discutir las opciones programáticas estratégicas que los partidos de diferentes siglas pueden encontrar en función de la posición de sus competidores en los sistemas políticos individuales¹.

En la tercera parte explicaré a grandes rasgos por qué creo que no nos sirve de ayuda la caracterización de la actual transformación de los sistemas de partidos postindustriales como una separación de los *agentes* políticos respecto de sus *principales*, los electores. Traté esta cuestión en mi crítica al influyente y a menudo citado artículo de Katz y Mair (1995; reimpresso en Mair, 1997) sobre el auge de los “partidos cartel” (Kitschelt, 2000a). Aquí sostendré que si alguna cosa ha sucedido con la sensibilidad de los partidos políticos ante las demandas ciudadanas, ésta ha aumentado en las últimas décadas, como se puede inferir a partir del descenso de los vínculos clientelistas entre ciudadanos y políticos en las democracias del capitalismo avanzado, un tema que también he tratado anteriormente (Kitschelt, 2000b, 2002, 2003b). De hecho, hay evidencias de que incluso en la reciente era de “globalización”, la sensibilidad partidista continúa influyendo en la elaboración de políticas. Realizaré una revisión incompleta de la literatura para ilustrar este aspecto en la cuarta parte. En la parte final, me detendré brevemente en la cuestión de la diferenciación de los modos de acción política.

I. DIFERENCIACIÓN DE LAS PREFERENCIAS E INTERESES POLÍTICOS

Los sociólogos y los politólogos se lamentan de no tener buenas teorías sobre la formación de las preferencias políticas; sin embargo la sociología política teórica y empírica se basan, al menos implícitamente, en teorías sobre la formación de preferencias que, por otra parte, sólo se contrastan de vez en cuando. Aquí voy a plantear una serie de proposiciones sobre la formación de preferencias que tiene dos aspectos, analíticamente separados aunque empíricamente interrelacionados, dependientes de las condiciones político-económicas predominantes. En primer lugar, tenemos las preferencias de maximización de los recursos materiales e ingresos, según las que los actores buscan maneras de optimizar sus ingresos futuros teniendo en cuenta las cantidades y las certezas (seguridad) de su circulación. De un lado, tales preferencias exigen que haya una redistribución, dirigida mediante la actuación política, de las dotaciones de bienes y transferencias hacia los menos afortunados o al menos hacia aquellos grupos sociales que lo requieran de un modo especial. En el otro lado de las preferencias distributivas, se insiste en que el único modo aceptable de asignación es el que resulta del intercambio

1. Con estas secciones pretendo actualizar y revisar el utillaje analítico que he utilizado en trabajos previos (Kitschelt, 1994, 1995 y 2001, y, como estudios de caso, Kitschelt, 2003a, y Kitschelt y McGann, 2003).

espontáneo y voluntario en el mercado. En segundo lugar, hay una serie de preferencias sobre las estructuras de gobernanza de la vida social que van desde posiciones “liberales” hasta posiciones “autoritarias”. Las primeras enfatizan la autonomía individual de los ciudadanos para dirigir sus estilos de vida, la tolerancia y el respeto hacia la diferencia sociocultural, esté ésta relacionada con el género o con las creencias y las prácticas culturales, y el derecho de individuos autónomos a participar en las decisiones políticas vinculantes colectivamente. Desde la perspectiva opuesta, “autoritaria”, se supone que el desarrollo de la vida social se rige por la conformidad con unas normas uniformes y unos principios regulativos de “decencia” colectivamente compartidos que favorecen la homogeneidad cultural, una forma particular de organización familiar y su código sexual correspondiente, justificado con un sistema de creencias religiosas dominante e impuesto y hecho respetar por una autoridad política, moral y social más elevada ante la que se espera que los individuos se muestren deferentes². Algunas veces me he referido a los polos de la política distributiva como “izquierda” y “derecha”, una caracterización imprecisa, cuando no engañosa, dada la semántica cotidiana de las nociones izquierda-derecha (liberal-conservador). Los actores políticos reales que utilizan esa metáfora espacial, formal y unidimensional, para caracterizar los perfiles de preferencias, señalan con ella tanto posiciones sobre la dimensión de la distribución económica como sobre la de las estructuras de gobernanza sociocultural. Sin embargo, y para ser consistente con el uso que hice de la terminología en el pasado, utilizaré adjetivos compuestos como izquierdista-liberales, derechista-liberales, etc., para caracterizar a los individuos y a los grupos en ambas dimensiones.

Tradicionalmente las preferencias sobre la distribución y los recursos se han asociado con los “factores” de tierra, capital y trabajo. Sin embargo, estoy de acuerdo con Rogowski (1989), con las matizaciones de Alt *et al.* (1996) y Frieden y Rogowski (1996), en que el factor de producción más escaso y valioso del mercado en el capitalismo avanzado es el capital humano. Además, puesto que este recurso es relativamente “específico”, en el sentido de que los costes de su adquisición son irrecuperables y que acostumbra a ser difícil reutilizarlo de un tipo de trabajos a otro, las divisiones ocupacionales y sectoriales juegan un papel importante en la formación de los intereses económicos de la gente. El deseo de los actores de utilizar la política como un mecanismo redistributivo que supere la asignación espontánea del mercado depende de la cantidad y la seguridad de la circulación de ingresos que conocen por su experiencia en los mercados. Los individuos que obtienen una gran parte de los ingresos que asigna el mercado porque disponen de mayores recursos en capital humano y que tienen unos ingresos de mercado relativamente seguros, están más inclinados hacia posiciones distributivas “derechistas” que permitan que la escasez de recursos se distribuya mediante contratos

2. Una forma instructiva de caracterizar empíricamente la dimensión autoritaria/liberal se puede ver en el nuevo artículo de Flanagan y Lee (2003).

libremente establecidos en el mercado. Los individuos cuyos ingresos derivan de fuentes ajenas al mercado o cuyos ingresos de mercado son relativamente bajos y/o inseguros, prefieren una distribución dirigida de los recursos que proporcione cobertura y reasigne los derechos de propiedad.

Empíricamente, la tendencia a respaldar una redistribución dirigida políticamente, principalmente mediante el estado del bienestar, debería disminuir a medida que nos movemos desde el sector del empleo público y no lucrativo (subsidiario), especialmente los servicios sociales (educación, sanidad, asistencia, etc.), hasta los sectores del mercado privado, primero por los que no están expuestos a nivel internacional y finalmente hasta los que sí lo están. El hecho de tener unas mayores habilidades (educación) se puede traducir en una mayor orientación hacia el mercado, suponiendo que los individuos que las tienen no trabajan normalmente en servicios sociales ajenos al mercado. La especificidad de recursos puede dar lugar a una mayor tendencia a respaldar mecanismos de cobertura política y redistribución, suponiendo que este efecto no sea contrarrestado por otras características de la posición en el mercado³.

Otros elementos que pueden afectar a las preferencias relacionadas con la (re)distribución dirigida de recursos y que no traté en mi trabajo previo son las relaciones de autoridad en las organizaciones —en el sentido en que Wright (1985, 1997) emplea el término— y el género. Las personas que están encargadas de la distribución de recursos escasos generalmente consideran los problemas de agencia y las relaciones de escasez con mayor seriedad que las personas que ocupan posiciones subordinadas o que quienes están implicadas en una estructura de decisión colegial. En conjunto, esto hace que quienes ejercen la autoridad estén más inclinados a confiar en el libre contrato, que resalta los incentivos individuales que están en juego, que en la redistribución centralizada, que puede apagar los incentivos individuales. En cuanto al género, la crítica y la enmienda del análisis del estado del bienestar de Esping-Andersen (Esping-Andersen, 1990, 1999; Sainsbury, 1999) ha mostrado que las mujeres tienen una preferencia diferenciada por mayor niveles de redistribución y seguridad a través del estado del bienestar, porque están mucho más expuestas que los hombres a los riesgos de la integración del mercado debido a la división sociocultural imperante de las labores familiares, que carga sobre ellas la mayor parte de las tareas del cuidado de los niños y los ancianos. Por lo tanto, tal y como Estevez-Abe *et al.* (2001) han sostenido con-

3. En este sentido, aunque me gusta el modelo teórico de Iversen y Soskice (2001), soy escéptico con los hallazgos empíricos que sostienen que hay una influencia neta de las habilidades/recursos específicos sobre las preferencias acerca de la redistribución del estado del bienestar que 1) no controlan por la exposición al mercado de los individuos que tienen esas habilidades específicas y 2) cubren áreas de la política social para las que los autores no explican la lógica de porqué los individuos que tienen habilidades/recursos específicos deberían orientarse más hacia la seguridad que aquellos que no tienen esas habilidades/recursos (sistema sanitario universal, sistema de pensiones). La exposición al mercado puede ladear la especificidad de recursos de los individuos a la hora de considerar la formación de sus intereses políticos.

CUADRO 1.

PREFERENCIAS POLÍTICAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

(PREFERENCIA HACIA POLÍTICAS SOCIALES-ESTADO DEL BIENESTAR)

	<i>¿Empleado en el sector público?</i>	<i>¿Empleado fuera del sector comercial?</i>	<i>¿Bajo nivel de formación educativa?</i>	<i>¿Rol de subordinado en la jerarquía organizativa?</i>	<i>¿Mujer?</i>	<i>Inclinación a apoyar un estado del bienestar redistributivo (hombre-mujer)</i>
GRUPO I: Con cualificación baja-media en servicios públicos	+	+	+	+	+	4,0-5,0
GRUPO II: Profesionales del sector de servicios públicos	+	+	-	=	+	2,5-3,5
GRUPO III: Asalariados/as de cualificación baja en el sector priva- do de ámbito na- cional	-	+	+	+	+	3,0-4,0
GRUPO IV: Asalariados/as de cualificación me- dia en el sector comercial	-	-	=	=/+	+	1,0-2,5
GRUPO V: Profesionales y empresarios del sector nacional de producción sim- bólica	-	+	-	-	+	1,0-2,0
GRUPO VI: Gerentes de empre- sas, propietarios y profesionales de servicios para las empresas	-	-	-	-	+	0,0-1,0
GRUPO VII: Pequeña empresa sin formación profesional	-	-/+	=	-	+	0,0-2,0

vincentemente, la actual inserción de las mujeres en el sistema de reproducción familiar dificulta su inversión en habilidades para el mercado de trabajo y las orienta más hacia trabajos en el sector “blando” no lucrativo en el que la participación flexible o discontinua conlleva unas penalizaciones menores, sobre todo para el progreso de la carrera profesional, que en el sector del mercado lucrativo.

Si intentamos dar cuenta de las preferencias políticas sobre la distribución, lo que obtenemos es una combinación compleja de dotaciones de recursos y modos de inserción en los mercados de trabajo que contravienen una clasificación de los intereses sobre la distribución económica realizada simplemente a partir de un factor o sector. Un modelo de la formación de preferencias tendría que contrastar el impacto de esos atributos simultáneamente e interactuando unos con otros. Desgraciadamente las encuestas a nivel internacional acostumbran a carecer del tipo de datos para realizar esta contrastación, principalmente porque sus autores todavía elaboran las preguntas de las encuestas a partir de teorías anticuadas sobre la estratificación social y de clases. Para fines heurísticos, el cuadro 1 identifica seis “posiciones de la estructura social” y su impacto sobre la formación de preferencias distributivas, habiendo ponderado igual y aditivamente todos los criterios. A cada posición sólo le asigno los valores alto, bajo y, algunas ocasiones, intermedio, a veces con rangos (por ejemplo para reflejar las diferencias de género). No hago conjeturas acerca de los recursos concretos de las habilidades de capital humano y, por lo tanto, he aparcado esa dimensión. Lo que este ejercicio heurístico debería demostrar es que nociones convencionales como la de clase obrera manual asalariada o la de clase media asalariada de cuello blanco se desvanecen cuando tenemos en cuenta el control de recursos y la posición en el mercado de trabajo de los ciudadanos. La heterogeneidad de los intereses distributivos *dentro* de estas categorizaciones sociales clásicas es al menos tan grande como la que hay *entre* ellas. Las orientaciones distributivas de los trabajadores, por ejemplo, pueden oscilar desde las posiciones bastante “pro-capitalistas” de varones técnicos cualificados que trabajan en industrias de manufacturación dedicadas a la exportación (grupo IV: puntuación de 1,0 sobre un total de 5,0) hasta las posiciones de mujeres de cualificación baja o media que trabajan en servicios o industrias de ámbito nacional (4,0 sobre 5,0). Entre los que no son obreros, la mayoría de los pro-capitalistas son profesionales autónomos con formación académica o directivos de grandes empresas (abogacía, contabilidad o finanzas), mientras que la mayor parte de los anti-capitalistas son mujeres profesionales del sector público o no lucrativo de servicios (profesorado, sanidad).

Respecto a la orientación liberal/autoritaria de las estructuras socioculturales de gobierno, en mi trabajo previo hice hincapié en los predictores 1) educación, 2) estructura de las tareas a desempeñar en los puestos de trabajo (tareas de interacción con el cliente frente a tareas de procesamiento de documentos/objetos) y 3) género. Todavía creo que estos rasgos sociales son relevantes para la formación de las preferencias políticas. Una buena cantidad de investigaciones sociológicas y de psicología política con-

firma que la educación es un predictor robusto de la tolerancia hacia la ambigüedad y la diversidad así como de las disposiciones hacia la participación (buena disposición y demanda de participación política; sentirse eficaz políticamente). El hecho de que quienes trabajan en tareas simbólico-culturales y de interacción con los clientes (educación, sanidad, trabajos sociales, actividades culturales/medios de comunicación) sean más liberales puede deberse, en parte, a la autoselección en una estructura de labores en la que operan con tecnologías altamente inciertas (entendidas como las que tienen relaciones causa-efecto indeterminadas) que requieren ajustes constantes, negociación y *feedback* con los “objetos” sociales que tratan. En parte, la exposición a un entorno de trabajo altamente desestructurado también puede crear un efecto socializador predisponiendo a la gente hacia una mayor tolerancia de la diferencia y hacia orientaciones participativas. Este efecto puede ser reforzado por la estructura de autoridad de las organizaciones formales que operan con tecnologías de trabajo inciertas que enlazan el conocimiento localizado y descentralizado de empleados y clientes. Como ha mostrado la investigación que trabajaba con el marco teórico de la contingencia de las organizaciones y los costes de transacciones desde 1960, las organizaciones que manejan tecnologías inciertas de interacción con el cliente acostumbran a tener estructuras jerárquicas más planas, con tomas de decisiones también más colegiadas, que estructuras jerárquicas *top-down*. Por lo tanto, en comparación con mi trabajo anterior, incorporo la estructura de autoridad en la organización de trabajo (la colegial predispone a la gente a adoptar posiciones liberales) como una influencia de refuerzo. Finalmente, podríamos tener en cuenta el efecto del envejecimiento en el descenso de la disposición a permanecer abierto a la diversidad —y eso también significa: innovación a través del tiempo— como un determinante del ciclo de vida avanzado sobre las preferencias políticas, pero puede muy bien ser que el efecto de la edad desaparezca si lo controlamos por la educación, las estructuras de tareas de interacción con el cliente y con la implicación en estructuras socioculturales de gobierno.

En el cuadro 2 se presentan las mismas seis “posiciones” sociológicas ejemplares de la sociedad postindustrial y se calcula su inclinación hacia orientaciones liberales en base a una lógica lineal y aditiva equivalente con los supuestos del cuadro 1. Lo sorprendente del resultado es que si hay algún “efecto de clase” tradicional en la formación de las preferencias políticas, éste se manifiesta en el ámbito de las preferencias socioculturales liberales/autoritarias, no en el de las preferencias distributivas (véase también Kitschelt, 1993). Como término medio los miembros de la “clase obrera” tienden a ser más autoritarios que los miembros de la clase media, aunque de nuevo también encontramos una considerable discrepancia intraclase (considérense los grupos I y V frente a los grupos II y VI). Esta variación intraclase está ligeramente desequilibrada. El cuadro señala algo del “autoritarismo de la clase obrera” (Lipset, 1960/1982), pero también señala la gran diversidad existente entre las categorías que en el pasado eran caracterizadas como de clase media. Tratar a la clase media como una categoría a la

CUADRO 2.

PREFERENCIAS POLÍTICAS SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA SOCIOCULTURAL
(PRINCIPIOS LIBERAL Y AUTORITARIO)

	<i>¿Educación superior?</i>	<i>¿Puesto de trabajo con estructura de tareas de interacción con el cliente?</i>	<i>¿Puesto de trabajo con autoridad colegiada o alta autonomía?</i>	<i>¿Joven?</i>	<i>¿Mujer?</i>	<i>Inclinación a apoyar principios socioculturales liberales (hombre viejo-mujer joven)</i>
GRUPO I: Con cualificación baja-media en servicios públicos	=	+	-	+/-	+/-	1,5-3,5
GRUPO II: Profesionales del sector de servicios públicos	+	+	+	+/-	+/-	3,0-5,0
GRUPO III: Asalariados/as de cualificación baja en el sector privado de ámbito nacional	-	-	-	+/-	+/-	0,0-2,0
GRUPO IV: Asalariados/as de cualificación media en el sector comercial	=	-	=	+/-	+/-	1,0-3,0
GRUPO V: Profesionales y empresarios del sector nacional de producción simbólica	+	+	+	+/-	+/-	3,0-5,0
GRUPO VI: Gerentes de empresas, propietarios y profesionales de servicios para las empresas	+	+	-	+/-	+/-	2,0-4,0
GRUPO VII: Pequeña empresa sin formación profesional	=	-	-	+/-	+/-	0,5-2,5

que potencialmente podemos considerar un agente con atributos políticos en razón de preferencias unidas colectivamente no nos lleva a ninguna parte.

Naturalmente, lo interesante acerca de las consecuencias de la formación de las preferencias políticas para el desarrollo de la política democrática en las sociedades postindustriales contemporáneas no es tanto la micrológica de la formación de preferencias a partir de la inserción de los ciudadanos en el mercado de trabajo, la familia y las organizaciones empresariales, como los *efectos agregados de tales microprocesos en los perfiles de las preferencias de las sociedades enteras, condicionados por el desarrollo económico y las intervenciones políticas del pasado*. En función de la frecuencia relativa de “posiciones” que describen la formación de preferencias de los ciudadanos en una sociedad, obtendremos diferentes distribuciones de preferencias políticas en las que los políticos transitan.

En mis trabajos anteriores he sostenido que la evolución de la economía y de la política tras la Segunda Guerra Mundial, la “Época Dorada” del capitalismo, tienden a hacer rotar las áreas más densas de la distribución de preferencias desde el eje de posiciones distributivas de izquierdas y posiciones distributivas de derechas (rotación que se mantiene neutra en cuanto a las posiciones liberales/autoritarias), hacia un eje cuyos polos son las posiciones liberal-izquierdista y autoritario-derechista. Los principales mecanismos que provocan esta rotación son 1) la postindustrialización, a través de la revolución educativa y la emancipación de la mujer en su confinamiento en la esfera familiar y 2) el auge de estados del bienestar extensos con la creación de un gran sector no lucrativo de servicios educativos, de sanidad, sociales y culturales. En la cara opuesta de este desarrollo las sociedades postindustriales han experimentado 1) el declive de la pequeña burguesía formada por individuos autónomos independientes carentes de grandes dotaciones en capital humano (especialmente agricultores, tenderos o pequeños comerciantes, artesanos, etc.) y 2) una estabilización, diferenciación y declive de la clase obrera, especialmente de obreros de baja cualificación.

Aquello que mi trabajo previo ignoró, y que ahora quisiera incorporar como una corrección, es que *el proceso de postindustrialización y la formación del estado del bienestar dieron lugar, a nivel internacional, a diferentes pautas y trayectorias que también influyen en la distribución de preferencias*. Elaboraré esta cuestión usando flexiblemente la tipología de los tres mundos de estados del bienestar de Esping-Andersen (1990). En los estados del bienestar residuales, con relativamente pocos servicios fuera del ámbito del mercado, el conflicto distributivo de clases sigue siendo comparativamente más intenso y el polo liberal-izquierdista de la distribución es más débil porque la expansión de los servicios sociales no lucrativos es mucho más lenta que en otras partes. En los estados del bienestar socialdemócratas redistributivos, con grandes sectores de servicios públicos, el potencial para una rotación de los principales ejes izquierdista-liberal/derechista-autoritario de la distribución de preferencias es mayor. Sin embargo, el tamaño del sector público va unido a la activación de los conflictos distributivos. Los estados del

bienestar conservadores continentales (demócrata-cristianos) asumen una posición intermedia con estados del bienestar menores y menos redistributivos que en Escandinavia pero con un mayor esfuerzo para promover un acuerdo de clase inclusivo mediante una red densa de seguridad social.

Mi conceptualización previa también había desatendido el perfil demográfico de las sociedades como determinante de las distribuciones de preferencias. En general, unas tasas elevadas de dependencia, y especialmente la existencia de una gran proporción de ancianos, deberían promover políticas redistributivas de izquierdas, por una parte, y frenar las políticas liberales, por la otra. Los ancianos, como beneficiarios de los servicios del estado del bienestar y las transferencias financieras insistirán en su continuidad, cuando no en su expansión. Al mismo tiempo, los ancianos son menos tolerantes hacia la diversidad y el dinamismo culturales, ya sea debido a efectos de tipo periodo (socialización) o de ciclo vital.

Estas proposiciones a nivel macro permiten la plena comparación estática o *cross-sectional*, pero no tienen en cuenta el ritmo del cambio dinámico. ¿A qué conducen una rápida desindustrialización/rápida postindustrialización y un rápido incremento de la tasa de dependencia? Iversen y Cusak (2000) dicen que aceleran el crecimiento del estado del bienestar, al menos en las décadas de 1970 y 1980, pues unos niveles elevados de incertidumbre en el mercado laboral hacen que la gente anhele redes de seguridad y compensaciones redistributivas. Sin embargo, el cambio en la estructura económica que ha precipitado la revolución de las tecnologías de la información y el crecimiento de los estados del bienestar al límite, sobre todo en los servicios sociales, pueden estimular una dinámica bastante diferente en la década de 1990 y posteriormente. En concreto, los profesionales jóvenes ya no se hallan ante una gran expansión del mercado laboral en los servicios de interacción con el cliente asociados con entes públicos o no lucrativos, sino que se hallan ante sectores expuestos al mercado y el comercio internacional en servicios financieros y de gestión empresarial, tecnologías de la información y servicios personales. En caso de que esta tendencia continuara, mi teoría predeciría el crecimiento de una parte de electores que combinarían preferencias de distribución económica derechistas y orientadas al mercado con orientaciones socioculturales liberales⁴.

Simultáneamente en la segunda mitad de la década de 1980 y, especialmente, en la de 1990 hubo un declive acelerado del sector industrial en muchos países. Entre aquellas personas que se vieron forzadas a abandonar los puestos de trabajo de manufacturación manual, empujadas hacia empleos con salarios menores, o que no pudieron

4. En la ciencia social de divulgación, el ascenso de una nueva clase media profesional y empresarial de creadores de símbolos que, aunque son centristas o derechistas en la dimensión de la distribución económica, son liberales en sus objetivos socioculturales, está bien captada en libros como *Bobos (Bourgeois Bohemians) in Paradise. The New Upper Class and How They Got There* (Nueva York: Simon y Schuster, 2000), de David Brooks o en *The Emerging Democratic Majority* (Nueva York: Scribner, 2002), de John B. Judis y Ruy Teixeira.

obtener del empleo en la manufacturación un sueldo para su familia, se pueden intensificar las demandas políticas de redistribución. Esto es pertinente, de un modo especial, para los asalariados manuales de baja cualificación y para los oficinistas. Al mismo tiempo, aquellos que mantienen sus puestos de trabajo en la manufacturación acostumbran a tener mejores capacidades. Puesto que tienden a trabajar en un ámbito de alcance internacional en el que sus empleos dependen de la rentabilidad de la empresa, las viejas preferencias de clase pueden ser reemplazadas por un nuevo sindicalismo empresarial, disponiéndolas gradualmente hacia una percepción de las cuestiones distributivas orientada al mercado y hacia posiciones socioculturales moderadas, de acuerdo con sus niveles educativos y la estructura de tareas de tratamiento de objetos en la que se hallan (grupo IV de los cuadros 1 y 2). Para mantener esos empleos, los trabajadores cualificados pueden optar por la limitación del estado del bienestar redistributivo y la actuación del sector público. En ese caso sus puntos de vista pueden divergir notablemente de los que tienen los miembros de la clase obrera poco cualificados que apoyan posiciones redistributivas y autoritarias (grupo III de los cuadros 1 y 2).

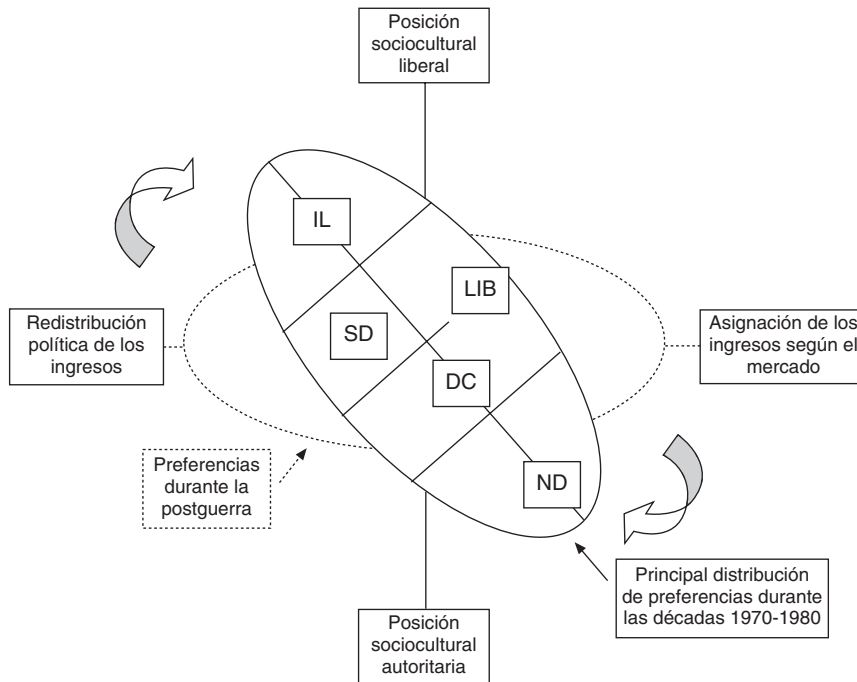
En el nivel macro, los gráficos 1 y 2 son una representación, como tipo ideal, de los cambios que ha habido en la distribución de preferencias políticas desde la década de 1970 hasta después del cambio de milenio. Hay una rotación de los principales ejes de la distribución de preferencias en la que deja de haber una afinidad natural entre el “izquierdismo” económico y el “liberalismo” sociocultural o entre el “derechismo” económico y el “autoritarismo” sociocultural.

Al mismo tiempo, el desarrollo político-económico ha restringido el rango de desacuerdos posibles respecto a la distribución, aunque esos conflictos siguen siendo notables o incluso llegan a intensificarse antes nuevas condiciones de escasez. Para que las figuras fueran algo más realistas, los ejes de las distribuciones de preferencias del gráfico 2 también se habrían podido desplazar más hacia la derecha. La restricción del rango de posiciones relevantes sobre la distribución y el desplazamiento general hacia posiciones de derechas se deben, naturalmente, a dos desarrollos macro que todavía no he mencionado. Uno es el colapso de la Unión Soviética y, con él, el colapso del modelo de economía planificada y de industrialización por sustitución de importaciones. El otro es la expansión del estado del bienestar hasta el límite impuesto por la economía y la demografía.

La cuestión fundamental es, por lo tanto, que la distribución de las preferencias políticas nunca es algo estático. Al hacer comparaciones a lo largo de varias décadas y entre diversos sistemas políticos, los modelos teóricos de la competición política deben tener en cuenta nuevas fuentes de variación. Según una de las críticas más frecuentes a mi libro sobre la nueva derecha, no tuve en cuenta el aumento de segmentos de clase obrera autoritarios que tienen posiciones redistributivas o intermedias en cuestiones de distribución de los recursos económicos. Ahora lo hago, aunque puntualizando que este desarrollo ha llegado a ser mucho más pronunciado a lo largo de la década de

GRÁFICO 1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PREFERENCIAS POLÍTICAS DESDE LAS DÉCADAS DE LA POSTGUERRA HASTA LAS DÉCADAS DE 1970 Y 1980



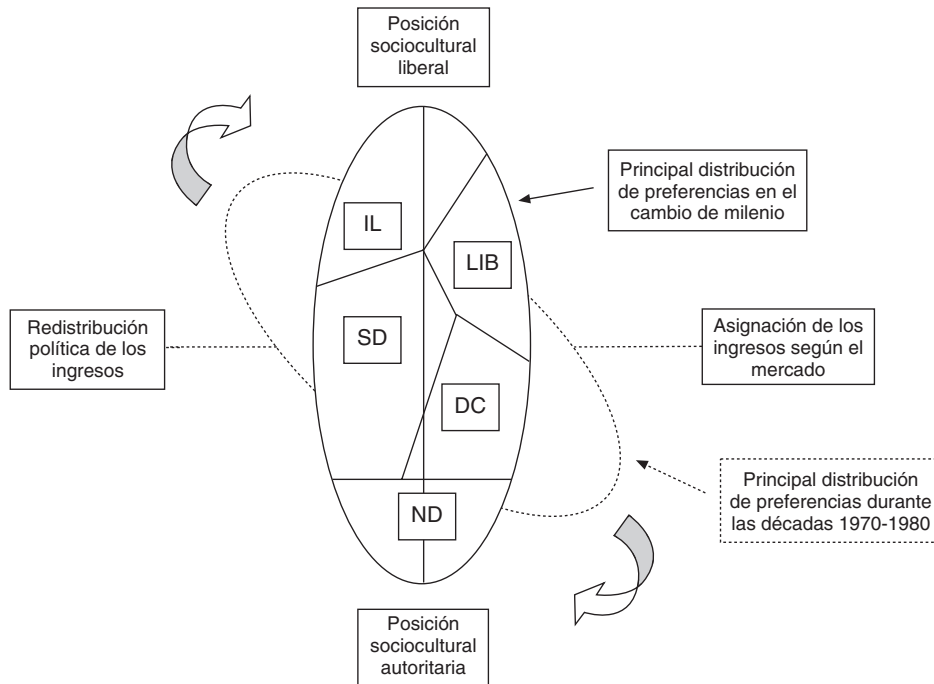
1990, cuando en mi anterior análisis empírico sólo cubría el periodo hasta 1990. Siguiendo la misma lógica, espero que la distribución macropolítica de las preferencias políticas cambie en el futuro, y quizá de forma difícil de anticipar. Sin embargo, aquello que diría que va a permanecer constante es la micrológica subyacente de la formación de preferencias políticas que relaciona las ubicaciones en el mercado, en organizaciones y en el entramado sociocultural, con las posiciones políticas.

II. REUBICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LOS PARTIDOS

Los gráficos 1 y 2 ya sugieren la respuesta de la élite de los partidos políticos a las distribuciones de preferencias de los electores mediante la asociación del espacio de preferencias con siglas políticas. Antes de abordar esta cuestión aclararé las premisas teóricas subyacentes de mis argumentos. Tales premisas están basadas en una interpretación flexible de las teorías espaciales de la competición (véase Ordeshook, 1997),

GRÁFICO 2.

DISTRIBUCIÓN DE PREFERENCIAS POLÍTICAS DESDE LA DÉCADA DE 1980
HASTA EL CAMBIO DE MILENIO



combinada con las teorías del procesamiento cognitivo de los votantes que suponen que estos son individuos racionales avaros con la información (Downs, 1957; Zaller, 1992; Lupia y McCubbins, 1998; Erickson, McKuen y Stimson, 2002). Algunos ciudadanos votan a los partidos que están más cerca de su ideal, aunque haciendo consideraciones estratégicas en los sistemas con distritos electorales pequeños y pocos partidos que generan equilibrios duvergerianos (Cox, 1997). Les importa el resultado final de las elecciones y los mensajes estratégicos de los políticos, incluso aunque la mayoría de los ciudadanos no respondan a las señales políticas, o respondan aleatoriamente o simplemente voten guiados por la costumbre. Las minorías racionales que son cognitivamente sensibles (¿elites?) cambian totalmente el funcionamiento de la democracia (Erickson *et al.*, 2002). La lógica espacial de elección partidista puede verse ligeramente atenuada por votantes racionales que solicitan de los políticos pequeñas dosis de encauzamiento mediante su “liderazgo de las cuestiones políticas”, aunque por lo general este ingrediente es demasiado pequeño como para que sea relevante en un análisis temporal y de varias sociedades (Merrill y Grofman, 1999).

En un espacio unidimensional, con electores sinceros y con algunas asunciones débiles sobre los costes de entrada y sobre la abstención debida a la indiferencia o la alienación (véase Kitschelt, 1994: capítulo 5), los partidos “vote-seeking” se extenderán por el espacio de preferencias haciéndose con distintas cuotas del mercado, incluso cuando la distribución de los votantes tenga un único máximo. Una lógica de “office seeking”, es decir, de maximización de la posición negociadora a fin de obtener puestos de gobierno, puede modificar, aunque no eliminar, esta estrategia de base de los sistemas multipartidistas. Y lo mismo sucede con la lógica “influence seeking” sobre la elaboración de las políticas.

Para la distribución de preferencias predominante en las décadas de 1970 y 1980, sostengo que una representación unidimensional del espacio de las políticas competitivas relevantes es una buena aproximación para casi todas las democracias postindustriales. Sin embargo, cuando llegamos al nuevo milenio las distribuciones de preferencias se aproximan a la representación del gráfico 2, con lo que cada vez más podemos estar tratando con una distribución de preferencias irreductiblemente bidimensional en la que los políticos sólo pueden identificar estrategias de equilibrio en caso de que sean empíricamente ciertos algunos supuestos restrictivos muy fuertes e improbables sobre la naturaleza de las distribuciones de preferencias. En lugar de asumir tales condiciones, sugeriré dos mecanismos conductuales que restringen la movilidad estratégica de los partidos políticos en el espacio electoral, incluso en situaciones de no equilibrio. Tales mecanismos imponen límites a la velocidad de los movimientos estratégicos de los partidos para variar las posiciones que han frustrado manifiestamente sus ambiciones “vote-seeking” y/o “office-seeking” en ocasiones anteriores de la competición electoral⁵. Primero, los electores procesan los cambios de posición estratégica de los partidos de modo incompleto y con demora. Segundo, y especialmente en los sistemas de partidos altamente institucionalizados, con unos costes de entrada relativamente elevados (ya sean debidos a los umbrales electorales, la financiación de los partidos o el acceso a los medios), los partidos evalúan la credibilidad de su posición a partir de la continuidad y la consistencia percibida de su posición política a lo largo del tiempo. El voto racional por programas políticos resultaría imposible si la emisión del voto no tuviera consecuencias predecibles para el comportamiento de los partidos. La credibilidad basada en la consistencia es un ingrediente crítico de la “función de producción del voto” de los partidos en las democracias altamente institucionalizadas, en las que los resultados electorales están dominados por minorías del electorado racionales y sensibilizadas ante las políticas.

5. La implicación teórica en este caso es que la derrota electoral es un importante desencadenante del reposicionamiento estratégico de los partidos. La literatura sobre elección estratégica de los partidos señala que, por supuesto, a veces los partidos también reaccionan ante nuevas oportunidades o se anticipan a amenazas externas (con la entrada de nuevos partidos o el ajuste de la oferta estratégica de partidos consolidados).

A partir de estas consideraciones generales, caracterizaré las opciones estratégicas y los dilemas de los partidos políticos ante la transición desde una distribución de preferencias políticas unidimensional con los polos izquierdista-liberal y derechista-autoritario, a una distribución bidimensional en la que el conocimiento de las preferencias sobre distribución económica de los ciudadanos no nos permite predecir sus preferencias liberales-autoritarias. Explicaré detenidamente las implicaciones estratégicas de las distribuciones cambiantes de preferencias para las cinco familias de partidos básicas que destacan en la mayoría de las sociedades postindustriales europeas: partidos de izquierdas-liberales, partidos socialdemócratas (obreros), partidos demócrata-cristianos o variantes laicas nacionales de esta familia (gaullistas), partidos laicos liberales de mercado y partidos de derechas-autoritarios.

Los partidos que empiezan con *posturas izquierdista-liberales* alcanzan su techo de apoyo electoral en la década de 1980, un techo que está parcialmente restringido por los límites del empleo en el sector de los servicios públicos y, en general, por los límites del empleo que está protegido ante el mercado o que no está expuesto a él. Si en el nuevo milenio la mayor parte del crecimiento del empleo entre profesionales con alto nivel de formación se da en el sector expuesto al mercado, la expansión electoral de tales partidos puede depender del desplazamiento hacia la derecha liberal de mercado y la conservación de su atractivo liberal sociocultural para impedir que los partidos socialdemócratas o los laicos liberales de mercado se apoderen de su espacio de temas electorales. Este rentable cambio de política ha empezado claramente en varios partidos izquierdista-liberales y se refleja en su capacidad superior para atraer a jóvenes profesionales y empresarios⁶. Esta reorientación estratégica también está promovida por la revolución demográfica que opone a la gente joven y educada con los retirados, de menores niveles educativos. Los partidos izquierdista-liberales tienden a defender una restricción del gasto en la generación actual de gente mayor (pensiones, sanidad y seguro de desempleo uniforme) para dedicar los recursos a inversiones en capital humano para los jóvenes (mejoras educativas y formación universitaria, asistencia pública en el cuidado de los niños). Naturalmente, esta perspectiva en política social también es consistente con la agenda de partidos liberal-feministas. Así, los partidos izquierdista-liberales están siendo la punta de lanza de la reforma del estado del bienestar asociada con la liberalización parcial del mercado. Pero si se desplazan en esa dirección con excesiva rapidez pueden ganarse las antipatías de su *stock* electoral tradicional izquierdista-liberal. Estos tradicionalistas podrían dejar de acudir a las urnas o votar por los partidos convencionales socialdemócratas, pues es poco probable que este electorado,

6. En los Verdes de Alemania y Austria, por ejemplo, desde mediados de los noventa los más jóvenes de quienes se dedican a los negocios privados son el grupo sociológicamente más sobrerrepresentado, justo detrás de estudiantes y empleados del sector público.

por sí mismo, pueda dar a los líderes políticos una oportunidad para formar un partido nuevo que consiga el apoyo electoral de una masa crítica.

Los *partidos socialdemócratas* cada vez pueden confiar menos en electorado de clase obrera, menguado y sin ánimo, por eso pasan a ser los principales partidos en centrarse en los individuos de mayor nivel educativo del sector público, especialmente del sector público de protección social, los empleados del sector no lucrativo y, en menor medida, los del sector privado de servicios. Las políticas que pueden forjar una coalición entre esos electorados requieren programas políticos moderadamente liberales y económicamente centristas. Esto requiere que los partidos abracen parcialmente la actual agenda de recortes en política social. El desplazamiento estratégico de la socialdemocracia hacia el centrismo económico y el liberalismo sociocultural lleva a una caída de su antigua base de apoyo de obreros manuales, sobre todo entre los obreros varones. Los que no tengan un buen nivel educativo ni habilidades profesionales serán apartados de la socialdemocracia tanto por motivos económicos como por motivos socioculturales. Se amontonarán en la reserva de quienes no votan o en la de partidos con proclamas autoritarias, incluso aunque estos se ubiquen en la derecha económica. Los trabajadores manuales con grandes habilidades técnicas y empleos en empresas competitivas situadas en sectores de mercado y expuestas a las exportaciones, pueden abandonar la socialdemocracia en favor de partidos conservadores con mensajes socioculturales moderados que apuestan por una mayor liberalización del mercado, ya sea bajo siglas demócrata-cristianas o bajo un partido laico. En definitiva, el “índice Alford” para los obreros manuales más jóvenes, índice que mide la diferencia entre el porcentaje de obreros y no obreros que apoyan la socialdemocracia, pasará a ser claramente negativo. En una perspectiva *cross-sectional* esta tendencia estará en parte condicionada por la incorporación de trabajadores manuales a asociaciones de intereses y redes organizativas que tradicionalmente han estado asociadas con la izquierda socialdemócrata, principalmente los sindicatos. Los jóvenes trabajadores que están desahogados viran hacia partidos derechista-autoritarios o liberales de mercado convencionales.

Los *partidos demócrata-cristianos*, y otros partidos nacionales “burgueses”, que normalmente se vinculaban con mensajes interclasistas cimentados alrededor de una posición económica centrista y el apoyo profundo a un estado del bienestar extenso, combinado con un mensaje sociocultural ligeramente autoritario y tradicionalista, se encuentran con graves dificultades estratégicas. Los juegos de compensaciones electorales que afrontan esos partidos pueden dar cuenta de su rápido declive y, en último término, de su reposicionamiento a lo largo de los últimos treinta años. Esto es válido, al menos fuera de Escandinavia, allí donde esos partidos se movieron en feudos de pequeñas circunscripciones. El declive de los principales partidos demócrata-cristianos o económicamente centristas se evidenció primero en los Países Bajos, Bélgica y Suiza, luego también en Italia, Francia y Austria y, finalmente, incluso en Alemania. En las recientes décadas este declive no se debe tanto a la secularización de las sociedades sino a la

imposibilidad de mantener una postura centrista en asuntos de política económica distributiva cuando se han visto ante un *statu quo* de estados del bienestar amplios, integrales y moderadamente redistributivos que tenían que hacer frente a los nuevos retos tecnológicos y demográficos de la década de 1990 y posteriormente. Con una presión creciente para liberalizar partes de la economía e imponer alguna restricción a las transferencias y servicios para la gente mayor, los políticos demócrata-cristianos ya no pueden compatibilizar el apoyo de la gente mayor, el de algunos segmentos del electorado de cuello azul y cuello blanco y el apoyo de los electores del empresariado, profesionales y gerentes. Una estrategia podría pasar por lograr el apoyo de los electores más proteccionistas socialmente hablando, especialmente los pensionistas, rezagados y apeados a medio camino. Esto abriría la posibilidad de reconstituir lo que fueron los viejos partidos "centristas" con un liberalismo de mercado más pronunciado, ahora dirigidos primordialmente a los "nuevos" electores de cuello blanco y a los de cuello azul que tienen una alta cualificación y están en sectores desprotegidos ante el mercado, y de comunidades profesionales o del comercio. Parte del viejo electorado socialmente proteccionista sencillamente seguiría con esos partidos mientras continuaran sus mensajes socioculturales cristianos y moderadamente tradicionalistas que harían que esos electores toleraran, aunque a regañadientes, el recién declarado liberalismo de mercado de los partidos. Este proceso está relacionado con un encarnizado combate interno sobre la política social en tales partidos.

Los *partidos laicos de derechas y económicamente liberales* pueden ser, considerando todos los aspectos, los claros vencedores del proceso de transformación socioeconómica y demográfica que impone nuevas restricciones al estado del bienestar. Esto se pone de manifiesto especialmente en aquellos países en los que han progresado electoralmente a expensas de los partidos burgueses demócrata-cristianos y centristas, divididos internamente en las cuestiones de política económica y social. El mayor reto estratégico de los partidos liberales es la cuestión de cómo combinar el mensaje del liberalismo económico con estrategias liberales en la dimensión sociocultural. Si los partidos económicamente liberales devienen extremadamente liberales en lo sociocultural, entonces compiten principalmente con los antiguos partidos izquierdista-liberales, pero pierden el tradicional electorado pequeñoburgués. Si suscriben mensajes socioculturalmente más autoritarios, entonces limitan su acogida entre los profesionales jóvenes y cultos del sector privado.

Los *partidos de la nueva derecha radical, con mensajes derechista-autoritarios* unifican a sus votantes principalmente alrededor de una variedad de temas relacionados con las estructuras autoritarias de gobernanza sociocultural, como la insistencia en la homogeneidad cultural (contra los inmigrantes, el pluralismo multicultural, la discriminación cultural positiva para las minorías, etc.), limitando la participación en las políticas de regulación económica (en lo relacionado con la ecología, seguridad laboral, etc.) o preservando el rol de la familia paternalista. Pero los votantes de tales partidos están divi-

didados internamente discrepando sobre el punto hasta el que se debería abrazar la agenda económica liberal de derechas. Los pequeñoburgueses que apoyan a estos partidos están mucho más entusiasmados con la liberalización del mercado que los hombres jóvenes de clase obrera que también los apoyan. Este conflicto interno está exacerbado por el acelerado cambio socioeconómico y el reposicionamiento estratégico de los socialdemócratas en la década de 1990. Con la transformación de los socialdemócratas en partidos liberales moderados de votantes de cuello blanco y económicamente centristas, la reserva disponible de trabajadores poco cualificados a quienes dirigir las proclamas socioculturales de los partidos derechista-autoritarios ha crecido. En consecuencia, a veces los partidos derechista-autoritarios han intentado atemperar su retórica liberal de mercado para no ofender a su potencial electorado de clase obrera. Sin embargo, los conflictos internos sobre política económica en los nuevos partidos de derechas empiezan a ser relevantes cuando esos partidos forman coaliciones de gobierno con partidos demócrata-cristianos liberales en lo económico, o con partidos conservadores laicos y liberales, que forman sus alianzas alrededor de políticas de liberalización económica acelerada y recortes del estado del bienestar ⁷.

De este modo, las familias de partidos de las sociedades capitalistas postindustriales están inmersas en sistemas de intercambios y compensaciones electorales estratégicos que no permiten soluciones de equilibrio fáciles. Aunque la ciencia política comparada no puede estipular las condiciones para un equilibrio (de Nash) en el que esos juegos estratégicos puedan detenerse, puede investigar la asociación empírica entre las elecciones estratégicas de los partidos, su capacidad para atraer y retener a votantes que ocupan distintas posiciones en el mercado y tienen distintas preferencias políticas sobre cuestiones distributivas y de gobernanza sociocultural, y sus réditos electorales, dependientes de las elecciones de todos sus competidores.

La rotación del espacio de las distribuciones de preferencias desde la Época Dorada de las décadas de 1950 y 1960, junto con el creciente despliegue bidimensional de ese espacio desde 1990, acentúan las tensiones y los juegos de compensaciones en las elecciones que hacen los políticos de sus mensajes programáticos destinados a las cruciales

7. Por ahora, la evidencia empírica sobre el efecto divisor de la participación en el gobierno para los partidos de la nueva derecha sólo puede derivarse de la experiencia de partidos que no son estrictamente "derechista-autoritarios", porque en los años ochenta y principios de los noventa también pudieron atraer a gran parte del electorado culto disgustado con los partidos consolidados por sus prácticas clientelistas y partidocráticas. Aquí estoy pensando en el Partido Austriaco por la Libertad y en la Liga del Norte italiana. En el primer caso, a finales de la década de 1990 el partido ciertamente atrajo a la pluralidad de trabajadores manuales, pero perdió este apoyo en las elecciones de 2002, después de su actuación en el gobierno cuando desplegó en su mayor parte políticas de liberalización del mercado. Tras la caída de la partidocracia en Italia, la Liga del Norte reorientó un tanto su estrategia hacia cuestiones socioculturalmente autoritarias, pero sobre todo trató de rehacerse como un auténtico *lobby* regional con un atractivo limitado a nivel nacional. Presumiblemente, puesto que los políticos derechista-autoritarios conocen la división interna en su electorado, en Escandinavia se han recluso a sí mismos a apoyar indirectamente la política legislativa de los gobiernos, pero sin asumir responsabilidades a través de nombramientos ministeriales.

minorías de electores racionales que votan según los temas de la agenda. Esto debería afectar tanto a la fortaleza de los lazos entre votantes y partidos como a la composición ideológica de los sistemas de partidos. En primer lugar, debería provocar un *declive general de la identificación partidista de los votantes, especialmente en aquellos sistemas de partidos en los que los grandes “partidos omnibus” captaron a segmentos sustanciales del mercado durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial*. Esta primera hipótesis, por lo tanto, estipula un descenso de la identificación partidista y un descenso acelerado en los sistemas con bajos niveles de fragmentación, medidos según la fórmula de Laakso-Taagepera, que mide el número efectivo de partidos para los votantes (NEP). El cambio y la diferenciación de las preferencias de los electores dificultan que los partidos puedan capturar un segmento amplio de posiciones de los electores mediante un único mensaje programático. A la vez, a medida que mejoran el nivel educativo general y la sofisticación de los electores, la proporción de votantes racionales por programa/temas aumenta y la de partidarios incondicionales decrece. Un mayor número de votantes premia o castiga estratégicamente a los partidos por sus posiciones programáticas y su ejercicio político con su elección electoral.

Con mi segunda hipótesis también postulo para las sociedades postindustriales tanto una tendencia general a lo largo del tiempo como diferentes desarrollos internacionales. En la mayor parte de las sociedades surgirán partidos (izquierdista-)liberales y (derechista-)autoritarios como vías para diferenciar sus mensajes partidistas, aunque el crecimiento y la solidez de estos partidos dependerá de varias contingencias (cfr. Kitschelt, 1995: capítulos 1 y 2). Las variables críticas que mejoran las oportunidades para estos partidos, haciendo más difícil que los partidos consolidados dominen los juegos de compensaciones electorales a los que se enfrentan en un contexto de preferencias populares cambiantes, son 1) la existencia de estados del bienestar extensos de tipo continental conservador o redistributivo socialdemócrata; 2) la convergencia de los partidos consolidados socialdemócrata, demócrata-cristiano de centro y conservador laico en una franja estrecha de políticas de “economía mixta”, con anterioridad al ascenso de los nuevos competidores, y 3) la prominencia de relaciones elector-político no programáticas y clientelistas mediante pagos materiales directos destinados a las circunscripciones electorales (mediante empleos en el sector público, vivienda pública, regulaciones favorables o concesión de contratos a los simpatizantes del partido).

Respecto a la primera hipótesis, consideremos someramente la evidencia mostrada en el cuadro 3 para todas —excepto las más pequeñas— democracias postindustriales avanzadas de la OCDE. La columna 1 proporciona el número efectivo de partidos a nivel electoral (NEP) alrededor de 1970. La segunda columna muestra el porcentaje de encuestados que se identifican con algún partido político en las dos primeras encuestas de elecciones a nivel nacional disponibles, según mostró Dalton (1999: tabla 2.1, p. 25). Este periodo es la década de 1950 para los Estados Unidos, la de 1960 para

CUADRO 3.

FORMATO DEL SISTEMA DE PARTIDOS Y DESALINEAMIENTO PARTIDISTA EN 18 DEMOCRACIAS

	<i>Número efectivo de partidos (alrededor de 1970)</i>	<i>Identificación partidista (% de quienes confían en las décadas 1960 y 1970)</i>	<i>Declive de la identificación partidista, décadas 1970-1990 (rango de puntuaciones 0-2)</i>	<i>Declive de partidos convencionales desde la década de 1960 hasta la de 1990 (última convocatoria electoral)</i>
Australia	2,98	92	1	-12,2
Austria	2,32	67	2	-36,3
Bélgica	4,49	50	1	-22,0
Canadá	3,25	90	1	-21,8
Dinamarca	4,55	52	0	-15,6
Finlandia	5,97	57	0	-18,0
Francia	2,35	59	2	-25,1
Alemania	2,44	78	2	-10,1
Irlanda	2,76	61	2	-16,3
Italia	3,92	78	2	-49,6
Japón	2,57	70	(1)*	-38,7
Holanda	7,13	38	0	-4,3
Nueva Zelanda	2,50	87	2	-27,1
Noruega	3,91	66	0	-15,2
Suecia	3,20	64	2	-12,1
Suiza	6,10	No hay datos	No hay datos	-21,5**
Reino Unido	2,02	93	2	-13,8
Estados Unidos	2,05	77	2	-4,8
Correlación con el número efectivo de partidos alrededor de 1970		- ,77	- ,78	+ ,18 (sin sistemas de voto plural: + ,36/N = 13)
Correlación con la identificación partidista en las décadas de 1960 y 1970			- ,66	- ,18 (sin sistemas de voto plural: - ,54/N = 12)

Fuente: véase el texto.

* Sólo está disponible el resultado de la regresión para la identificación partidista, no para la identificación partidista fuerte.

** Dada la heterogeneidad y la descentralización de los partidos suizos, la mitad del apoyo electoral del Partido del Pueblo Suizo en 1999 se contabilizó como apoyo a “nuevos partidos”. Esto es un sesgo de los resultados que va contra las hipótesis formuladas en el texto.

la mitad de los países, aproximadamente, y para el resto es la década de 1970. Esta heterogeneidad temporal no es importante porque la mayor parte de los cambios en la identificación partidista al nivel agregado ocurrieron desde 1970 hasta la década siguiente y la de 1990. Para cada país y cada estudio Dalton (1999) calcula regresiones sobre el porcentaje de encuestados que se identifican o que se identifican fuertemente con algún partido político. En casi todos los países hay una tendencia al descenso de la identificación partidista, aunque en distintas proporciones. Puesto que, dada la diferente longitud de los periodos y los errores estándar en las regresiones, el valor de los coeficientes es difícil de interpretar, la columna 3 simplemente aglutina valores dummy otorgándoles un punto si 1) a lo largo del tiempo ha habido una disminución estadísticamente significativa de la porción de quienes se identifican con algún partido y/o 2) la disminución estadísticamente significativa se ha dado entre quienes se identifican fuertemente con algún partido (un punto a cada uno para cada ecuación). La disminución más consistente y fuerte recibe una puntuación de 2, la ausencia de una disminución significativa una puntuación de 0.

Las dos últimas filas del cuadro 3 muestran correlaciones bivariadas para nuestros 18 casos. La fragmentación del sistema de partidos alrededor de 1970 manifiesta una relación negativa fuerte con los niveles de identificación partidista hacia el final de la Edad Dorada del crecimiento económico, décadas de 1960 y 1970. Cuantos más partidos relevantes había en este periodo, menos electores afirman identificarse con cualesquiera de ellos ($r = -.77$). Sin embargo, y más importante para lo que me interesa aquí, en los sistemas de partidos con un nivel bajo de fragmentación la disminución de la identificación partidista es más marcada para el periodo de veinte a cuarenta años que cubre la realización de las encuestas, desde 1960 o 1970 hasta la década de 1990 ($r = -.78$), y, en general, la reducción de la identificación partidista es más relevante estadísticamente en los países que partieron de unos niveles muy elevados de identificación partidista ($r = -.66$). En una situación de preferencias políticas dinámicas y diversificadas, los partidos ya no pueden crear unas fidelidades de base en el electorado tan grandes como las que captaron tras la Segunda Guerra Mundial.

Puesto que el crecimiento electoral de los nuevos partidos izquierdista-liberales y de los derechista-autoritarios es un asunto más complicado, de cuya estructura de oportunidades he dado ya cuenta en otro lugar (Kitschelt, 1988, 1995), aquí no voy a ocuparme de ello de un modo exhaustivo. Debido a las complejidades de los costes y beneficios de entrada de partidos en cada sociedad, sólo hay una relación directa débil entre el número efectivo de partidos de cada democracia alrededor de 1970 y el consiguiente descenso del total de votos a partidos convencionales hasta las últimas elecciones legislativas de la década de 1990, presidenciales en el caso de Estados Unidos. He operacionalizado los partidos convencionales como aquellos que recibieron un apoyo electoral medio del 5 por 100 o más del voto total durante todas las elecciones celebradas

en la década de 1960 para las que presentaron candidaturas (columna 4, cuadro 3)⁸. La mayor parte del descenso se debe realmente al crecimiento de los partidos izquierdista-liberales y derechista-autoritarios, con la excepción de los casos con temas regionales, lingüísticos y culturales de Bélgica, Canadá y Nueva Zelanda.

En las sociedades en las que los votos se concentraban inicialmente en pocos partidos, el declive de la fortaleza de los partidos convencionales es ligeramente mayor que en los sistemas que en 1970 ya contaban con una elevada fragmentación ($r = +,18$; $N = 18$), pero la relación no es estadísticamente significativa. Incluso aunque no tengamos en cuenta los distritos uninominales con fórmula de mayoría simple porque influyen a los nuevos partidos unos costes de entrada elevados, la relación incluso pasa a ser un poco más fuerte ($r = +,36$; $N = 13$). Lo mismo es válido para la relación entre la proporción de identificación con partidos convencionales alrededor de 1970 y el descenso electoral relativo de los partidos convencionales desde las décadas de 1960 o 1970 ($r = -,18/N = 18$; $r = -,54/N = 13$). Los sistemas electorales, por sí solos, cuentan poco para explicar los cambios de formato de los sistemas de partidos, como también cuenta poco la fragmentación de los sistemas de partidos antes de 1970. La entrada de nuevos partidos requiere una consideración de las oportunidades estratégicas y de los costes más sutil de la que podemos obtener considerando las instituciones electorales por sí solas. Retornaré a esta cuestión en la próxima sección desarrollando detalladamente sólo una de las tres condiciones estratégicas para el crecimiento de los nuevos partidos de derechas; la existencia de vínculos electorado-partidos clientelistas en las democracias postindustriales⁹.

III. DESCARTELIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS E INSATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA

Mi esquema teórico se basa en el supuesto tácito de que los partidos políticos rinden cuentas y son sensibles ante los ciudadanos mediante sus mensajes programáticos y

8. Para consultar la lista de los partidos, véase Kitschelt (2002b), p. 194.

9. Un interesante, aunque problemático, esfuerzo para formalizar las condiciones generales bajo las que los nuevos partidos entran y se hacen con partes sustanciales del mercado está dividido en dos objetos de explicación: la decisión de los políticos de entrar con un partido con nuevas siglas y su logro del éxito electoral (Hug, 2001). Sin embargo, si nos centramos en los partidos izquierdista-liberales y derechista-autoritarios, no hay variación alguna que pueda ser explicada apelando a la decisión inicial de los políticos de formar partidos destinados al nicho de mercado programático respectivo. Prácticamente todos los países experimentan la formación de tales partidos porque la dinámica de la formación de las preferencias sociales crea las expectativas suficientes, al menos entre algún empresario político, de que un partido nuevo podría entrar en la arena electoral con un augurio razonable de éxito electoral. Pero la explicación de porqué algunos partidos consiguen mejores resultados que otros depende de la proporción de electores desatendidos por los partidos convencionales debido a la interacción de su historial de mensajes estratégicos y su formación de coaliciones con la envergadura y la intensidad de las nuevas demandas populares.

mediante el historial de las políticas desarrolladas. Sin embargo, en un influyente artículo de Katz y Mair (1995; reimpresso en Mair, 1997), se cuestionó este supuesto. La esencia de su argumento es que los partidos han ido teniendo cada vez más éxito aislándose a sí mismos respecto de las preferencias del electorado mediante la obtención de recursos fundamentales del sector público que garantizan su viabilidad, especialmente su financiación. En función de este control de los recursos públicos, los partidos convencionales crean “cárteles internos” que limitan la variedad de mensajes programáticos competitivos que se acepta proponer en las campañas electorales y, por lo tanto, excluyen a importantes grupos de electores cuyas opiniones políticas se sitúan al margen del conjunto de opciones apoyadas por el cártel del partido. Una consecuencia de esto es que las democracias postindustriales experimentan un nivel creciente de frustración ciudadana, alienación respecto a los partidos convencionales y una predisposición a respaldar a disidentes como antídoto ante los impenetrables e insensibles cárteles políticos nacionales.

Así, Katz y Mair postulan un vínculo entre los recursos públicos correspondientes a los partidos, su éxito electoral y el nivel de insatisfacción popular con los partidos y la democracia en una sociedad. Sin embargo, incluso cuando utilizamos sus propios datos, no hay relación alguna entre los cambios en la financiación pública de los partidos y la suerte electoral de los partidos convencionales (cfr. Kitschelt, 2000a: 172). El problema básico que subyace a sus proposiciones teóricas es el de un modelo inadecuado de relaciones principal-agente, que no presta atención suficiente a los incentivos que tienen los partidos políticos para huir de los planes del “cártel” cuando las recompensas electorales de atender las preferencias del electorado, desatendidas por el programa realizado a partir de los términos del cártel, parecen lo suficientemente halagüeñas. La hipótesis del cártel, parecida a la teoría de Robert Michels (1911/1962) de las oligarquías partidistas que no rinden cuentas ante la ciudadanía, infravalora la competición inter e intrapartidista, en las democracias multipartidistas que tienen umbrales de entrada relativamente modestos, para lograr el apoyo político. Sin extenderme más en la interpretación de la democracia postindustrial de Katz y Mair ¹⁰, me dirigiré al fenómeno que otorga visos de plausibilidad a sus argumentos; el declive de la satisfacción política y de la confianza en las instituciones democráticas. En esta cuestión es especialmente importante la evaluación de los parlamentos y las organizaciones de la administración pública como instituciones a través de las cuales los partidos de gobierno promueven y ejecutan decisiones legítimas. Los estudios académicos, así como los medios de comunicación, también han anunciado el declive ampliamente extendido de la confianza en la honestidad y la sensibilidad de los políticos (*The Economist*, julio, núm. 17, 1999: 51). Pero tenemos que descomponer esas evoluciones y diferenciar entre las distintas

10. Para una crítica más detallada del argumento de Katz y Mair, véanse Koole (1996) y Kitschelt (2000a).

causas que pueden influir en y cambiar los niveles de confianza en las instituciones democráticas, relacionándolos con los sistemas de partidos de cada país.

Primero, hay una tendencia de fondo en todos los países hacia un declive moderado de la confianza institucional, que puede ser debida a la economía política de la post-industrialización y a los cambios relacionados con la competencia cognitiva y las demandas de participación política de los ciudadanos. Los individuos más liberales y con mejores niveles educativos tienden a ser más recelosos ante los “agentes” políticos y a solicitar para los “principales” una vigilancia democrática de aquéllos más estrecha. La participación democrática está fundada en una actitud de sospecha respecto a todas las autoridades, no en la confianza (¿y la deferencia?) hacia quienes han sido elegidos y toman las decisiones. Por esta razón, el declive de la confianza institucional no ha afectado negativamente a las creencias de la población, generalmente casi universales, de que la democracia es la mejor ordenación política (Dalton, 1999; Klingemann, 1999). Y son precisamente los individuos que defienden esos valores democráticos con más intensidad quienes también manifiestan una mayor desconfianza hacia los agentes políticos. De este modo, las crecientes demandas de participación democrática pueden incrementar moderadamente la desconfianza institucional a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, la tendencia general de declive en la confianza en las instituciones políticas ha sido más bien pequeña cuando se ha medido con las *Encuestas Mundiales de Valores* de 1980/1981, 1990/1991 y 1995/1996, excepto en Finlandia, Austria y Canadá, tres países cuyo promedio de caída de la confianza desde principios de 1980 hasta el inicio de la década de 1990 es de más de diez puntos. Sin embargo, al menos en dos de ellos hay razones completamente idiosincrásicas que pueden jugar un papel crucial. A principios de la década de 1990, Finlandia pasó por una dura crisis económica y sin parangón debida, en parte, al colapso de las relaciones comerciales con su vecino, la antigua Unión Soviética. Canadá experimentó una crisis política institucional debido al fracaso en la resolución del problema constitucional de Québec. Finalmente, Austria se halló enfangada en un puñado de escándalos partidistas que apuntaron hacia una deficiencia más sistemática, de la que me ocuparé más adelante en el análisis comparado del declive de los partidos convencionales. En comparación con estos acontecimientos nacionales idiosincrásicos, el declive general de las tasas de crecimiento económico en las décadas de 1980 y 1990, así como también las diferentes actuaciones de los países al respecto, pueden influir tanto sobre la tendencia global al declive de la confianza institucional como sobre la variación interna de los niveles y de las ratios del cambio de la confianza. Sólo para casos excepcionales, como Finlandia, se puede establecer una pauta de asociación robusta entre el desempeño económico y la confianza institucional.

Tercero, Katz y Mair nos llevarían a predecir una relación entre 1) el afianzamiento de los partidos convencionales que se están cartelizando, lo que les proporciona una mayor resistencia electoral ante el declive cuando se los compara con los sistemas de

partidos en los que los partidos convencionales no se benefician de la cartelización; 2) el debilitamiento de la representación del electorado por parte de los partidos, y por lo tanto, 3) las diferencias internacionales de las curvas del declive de la confianza popular en las instituciones democráticas. Pero esta relación no se puede establecer. En general, los ratios del cambio de la confianza institucional agregada a lo largo del tiempo han sido, para la mayoría de los países, demasiado pequeños como para determinar pautas sistemáticas de relación con los rasgos de los partidos nacionales. Más relevante aún es el hecho de que el análisis *cross-sectional* de los niveles de confianza en las sociedades postindustriales de la OCDE revela una variación mucho más grande entre países que el análisis de los cambios a lo largo del tiempo en y entre los países. Un análisis más detallado de estas diferencias *cross-sectional* nos permite refutar la afirmación de Katz y Mair de la forma más directa.

Si Katz y Mair estuvieran en lo cierto, la cartelización y la connivencia interpartidista deberían ser prácticas recientes y en fase de intensificación que ayudarían a los partidos convencionales a protegerse de los nuevos competidores, a conjurar el descenso de su porción electoral, limitar sus mensajes políticos a determinado electorado y que, por lo tanto, en última instancia, producirían un conjunto creciente de ciudadanos insatisfechos, cuando no alienados. Una teoría que contradijera directamente tales afirmaciones sostendría que la existencia de viejos, no nuevos, partidos hegemónicos y cárteles partidistas ha estado relacionada con un nivel endémicamente bajo de satisfacción con las instituciones democráticas. Durante muchas décadas, estos cárteles clientelistas han sido capaces de aprovecharse de los recursos estatales para dar a los electores incentivos materiales para apoyar a la clase partidista dirigente. La cuantía de estos recursos excedió con creces el total que hoy se apropian los partidos a través de su financiación pública. Lo que sucedió en las décadas de 1980 y 1990 fue que las circunstancias político-económicas hicieron posible que las frustraciones populares contenidas contra los cárteles clientelistas se articularan en la arena política derribando, al menos en parte, los sistemas de partidos convencionales.

El arraigo de los cárteles clientelistas tras la Segunda Guerra Mundial está relacionado con la propiedad o la regulación estatal del sector industrial y financiero, cuyos empleados y propietarios se han beneficiado directamente de los grandes partidos convencionales. Estos sectores clientelistas entraron en una era de declive pronunciado durante las décadas de 1980 y 1990 por razones que he explicado detenidamente en otro lugar (Kitschelt, 2003b). A medida que estos sectores e industrias se han debilitado económicamente, y a medida que han ido creciendo los costes impuestos sobre el resto de la economía para mantener los privilegios del *rent-seeking* de algunos sectores respaldados por el clientelismo partidista, los votantes insatisfechos con la vieja política de cárteles de partidos han optado por salir de la política electoral (resultado: baja participación electoral) o por oponerse con la voz apoyando a partidos de protesta y de vida corta que no tienen un eje programático claro, o apoyando a partidos izquier-

dista-liberales o populistas de derechas que incorporan elementos del mensaje derechista-autoritario, pero que son capaces de atraer a una audiencia amplia por su arremetida anticientelista. *Por lo tanto, el auténtico problema de la variación internacional de la confianza institucional en las democracias postindustriales, y la reconfiguración resultante del sistema de partidos en las décadas de 1980 y 1990, no sería el surgimiento de “nuevos” cárteles de partidos convencionales mediante la expansión de la financiación pública de los partidos sino la tenaz persistencia de los viejos cárteles clientelistas de los partidos.* Las crisis político-económicas desacreditan el control clientelista que los políticos tienen sobre los empleos del sector público, los subsidios sociales, los subsidios empresariales y las contrataciones propicias como formas de mantener la conformidad política del electorado. La crisis de la empresa pública, especialmente en Austria e Italia, y la regulación pública de la empresa privada en beneficio de los grupos *rent-seeking*, como es el caso de Japón, provoca la erosión de las relaciones de intercambio clientelista entre políticos y electorado y, por lo tanto, de los partidos relacionados con esas prácticas. La columna 1 del cuadro 4 ofrece un listado de los dieciocho países de la OCDE ordenado por el nivel en el que el intercambio clientelista domina los vínculos entre políticos y electores durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Puede encontrarse una justificación detallada de las puntuaciones de los casos críticos, especialmente de aquellos que están en el extremo superior de la escala, en Kitschelt (2003b). Las puntuaciones están estrechamente correlacionadas con la valoración de los expertos acerca de los niveles relativos de corrupción y del estado de derecho, que, como se puede argumentar, son indicadores indirectos de la realización de arreglos clientelistas ¹¹. La segunda y la tercera columnas muestran el porcentaje de encuestados de quince de los dieciocho países que tienen “mucho” o “bastante” confianza en el legislativo o a la administración pública según la Encuesta Mundial de Valores 1990/1991. No hay datos disponibles para los tres países restantes. La columna 4 contempla la pérdida de votos de los partidos convencionales, desde la década de 1960 hasta finales de la de 1990, como una medida de la “voz” contra la clase política dirigente. La columna 5 provee una medida de la “salida” de la política manifestada en el descenso de la participación electoral. A partir de una regresión de la participación electoral sobre la secuencia de elecciones legislativas nacionales (presidenciales en Estados Unidos) desde aproximadamente 1970 hasta finales de la década de 1990, se indica la diferencia predicha de participación electoral entre la primera y la última convocatoria electoral de este periodo. Con la excepción de Australia, el coeficiente de esta regresión es negativo en todas partes, aunque con unos valores y una significatividad muy variados. Final-

11. La única excepción, con un nivel elevado de clientelismo y bajo de corrupción y donde el estado de derecho rige claramente, es Austria. Bajo el sistema “Proporz” para los principales partidos, muchas prácticas clientelistas constituían principios codificados y legalmente vinculantes de reparto político, de transacciones informales, no tácitas, cuando no ilegales.

CUADRO 4.
CLIENTELISMO, INSATISFACCIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS
Y DECLIVE DE LOS PARTIDOS CONVENCIONALES

	<i>Importancia de las relaciones de intercambio clientelista entre partidos y electorado</i>	<i>Confianza en instituciones legislativas en 1991 (% respuestas con nivel de confianza elevado)</i>	<i>Confianza en la administración pública en 1991 (% respuestas)</i>	<i>Declive del apoyo a partidos convencionales desde la década de 1960 (% de pérdida)</i>	<i>Declive de la participación electoral en elecciones nacionales (electores registrados) 1970-finales década 1990 (% de pérdida)</i>	<i>Declive de los partidos convencionales entre los electores registrados, década 1960-finales década 1990 (% de pérdida y % de voto a esos partidos a finales de la década 1990)</i>
Italia	5	32	27	-49,6	-11,2	-52,3 (38,1)
Austria	4	41	42	-36,3	-13,7	-42,8 (49,7)
Japón	4	29	34	-38,7	-20,0	-40,4 (30,0)
Bélgica	3	43	43	-22,0	-1,2	-20,2 (64,8)
Francia	2	48	49	-25,1	-14,8	-30,1 (44,1)
Alemania	2	57	39	-10,1	-15,1	-22,3 (66,9)
Irlanda	2	50	59	-16,3	-12,9	-23,0 (57,7)
EE UU	2	46	59	-4,8	-8,0	-11,1 (64,9)
Australia	1	Sin datos	Sin datos	-12,2	-10,3	-11,2 (81,5)
Canadá	1	38	50	-21,8	-12,3	-25,5 (44,9)
Holanda	1	52	46	-4,3	-8,2	-10,5 (63,4)
N. Zelanda	1	Sin datos	Sin datos	-27,1	-2,5	-34,5 (53,4)
Suiza	1	Sin datos	Sin datos	-21,5	-14,3	-21,9 (29,0)
Reino Unido	1	46	59	-13,8	-3,4	-13,2 (55,8)
Dinamarca	0	42	51	-15,6	-0,6	-14,0 (68,0)
Finlandia	0	34	33	-18,0	-12,0	-25,3 (53,5)
Noruega	0	59	44	-15,2	-6,7	-17,9 (58,5)
Suecia	0	47	44	-12,1	-7,4	-17,2 (69,1)
Correlación con la puntuación de clientelismo		-,49 (sin Finlandia: -,66)	-,38 (sin Finlandia: -,54)	-,74	-,42	-,73

mente, la columna 6 combina las estrategias de “salida” y de “voz”. Muestra la disminución del porcentaje de apoyo a los partidos convencionales entre los electores censados desde finales de la década de 1960 hasta finales de la de 1990. En los países en los que tanto la participación electoral como el apoyo a partidos convencionales disminuyeron fuertemente, como en Japón, esta medida combinada de salida-voz magnifica el efecto de cada una de estas variables tomadas por separado.

El clientelismo tiene una relación moderada con la variación de los niveles de confianza en los legislativos y la administración pública cuando eliminamos el caso excepcional de Finlandia ($r = -.66$ y $-.54$), aunque no se controla por otras diferencias socioestructurales y económicas entre los países. Los países con altos niveles de clientelismo tienen sistemáticamente unos niveles de confianza menores que los países sin clientelismo. Más sorprendentes son las relaciones entre el clientelismo y la pérdida de voto a largo plazo de los partidos convencionales ($r = -.74$), así como el efecto combinado salida/voz ($r = -.73$). Si eliminamos casos atípicos como los de Finlandia y Nueva Zelanda, que atravesaron una profunda transformación de su estructura económica para salir de una industrialización por sustitución de importaciones, con efectos deformadores que no tienen parangón en ninguna otra economía industrializada, las relaciones del clientelismo con la pérdida de voto de los partidos convencionales y la activación de la combinación salida/voz por los electores insatisfechos son mayores de $r = -.80$. Pero la relación del clientelismo con el cambio en la participación electoral es débil, $r = -.42$, principalmente porque dos de los cuatro países con mayores niveles de clientelismo, en los que hubiésemos esperado encontrar un declive excepcional de la participación electoral, Bélgica e Italia, incluían la obligatoriedad del voto en su legislación electoral.

De esta pauta de relaciones internacionales deduzco que no fueron los arreglos clientelistas de los nuevos cárteles partidistas, sino de los viejos cárteles, lo que facilitó la cartelización mediante el ofrecimiento de pagos a los electores *rent-seeking* y lo que llevó a que los electores tuvieran unos niveles bajos de satisfacción con las instituciones democráticas. La situación político-económica durante las décadas 1980-1990 provocó la elección de estrategias salida/voz en una buena parte del electorado con la finalidad de mostrar su insatisfacción ante los arreglos clientelistas aceptados antaño. Todo esto es válido más allá de la tendencia de fondo de recelo creciente hacia las instituciones democráticas y de la resistencia de los electores a los partidos convencionales en todas las democracias postindustriales. Como he sostenido arriba, yo atribuiría esta tendencia de fondo a la dinámica general de cambio y diversificación de las preferencias electorales, expuesta en la primera sección de este artículo, y al generalmente pobre desempeño de las economías capitalistas en el cambio de milenio.

IV. ¿INSENSIBILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LA CIUDADANÍA?

En la sección anterior he presentado argumentos contra la afirmación de que el vínculo entre la opinión pública (las preferencias políticas de los ciudadanos), por una parte, y la competición partidista y los gobiernos de partidos, por la otra, se ha roto. Muy al contrario, el desmoronamiento de los partidos clientelistas y de los sistemas de partidos, provocados por la dinámica subyacente de una mayor demanda de participación y de una política pública programada y enfocada a temas concretos, especialmente en el área de las políticas político-económicas, es probable que mejore la sensibilidad de los partidos a las demandas programáticas del electorado. Sin embargo, hay teorías político-económicas, que deben ser consideradas seriamente, que han postulado el declive de los gobiernos partidistas y de una competición programática partidista enjundiosa. De acuerdo con esas teorías, las restricciones de 1) la globalización económica, especialmente la de los mercados de capitales abiertos; 2) el cambio tecnológico, que provoca una revalorización cada vez mayor de quienes concurren al mercado laboral con inversiones en capital humano elevadas, y 3) la inminente revolución demográfica, con unas altísimas tasas de dependencia en las democracias capitalistas avanzadas que, en último término, restringen tanto la capacidad de los políticos para buscar estrategias políticas “responsables” en las instituciones legislativas y ejecutivas como la posibilidad de conseguir unos resultados político-económicos que lleven la impronta de un “gobierno responsable”. Según esta visión, la globalización financiera y la innovación tecnológica reducen los salarios de quienes tienen una cualificación baja, aumentan la desigualdad e incluso limitan las políticas sociales redistributivas porque sitúan en desventaja relativa a las empresas que están ubicadas en países con salarios sociales elevados. El envejecimiento demográfico de las sociedades postindustriales debilita más la viabilidad financiera de la red existente de protección social y desalienta el crecimiento económico.

Hay pocas dudas sobre el hecho de que todas esas tres fuerzas tienen algún efecto sobre la disminución de las tasas de crecimiento económico y sobre la mejora de las oportunidades de los ciudadanos y de los resultados distributivos. Sin embargo, la relación entre el cambio económico estructural, la política partidista y los resultados político-económicos es algo más controvertida. ¿Es la política partidista sólo una variable interviniente con pocos efectos independientes sobre la economía política del crecimiento y la distribución, o bien moldea el impacto que tienen las fuerzas estructurales relacionadas con la globalización económica, la innovación tecnológica y el cambio demográfico sobre el crecimiento y la distribución de los ingresos y las oportunidades de los ciudadanos? Sin llegar a entrar desde un plano teórico y empíricamente adecuado en el vasto tema de los “recortes en el estado del bienestar”, sintetizaré cómo una rama significativa de trabajos de investigación ha hallado efectos partidistas constantes tanto

en los niveles como en los ritmos de cambio de la política social incluso en una era de globalización y postindustrialización. El gobierno que rinde cuentas ante los ciudadanos puede que no desaparezca incluso en situaciones político-económicas difíciles.

Las teorías de la política partidista sobre el cambio de las políticas del estado del bienestar ahora tienen que explicar, al menos, otras cuestiones sobre los recortes en la política social y la reforma político-económica de las últimas décadas. En primer lugar, aunque no hay ninguna teoría simple y directa de la globalización en la economía política comparada de los estados del bienestar, Scharpf (2000) quizá ha aportado una perspectiva que pone el mayor énfasis en el impacto del desarrollo económico no mediado políticamente, especialmente la exposición global de las economías internas, sobre las presiones para cambiar el estado del bienestar, por ejemplo en los niveles impositivos y los subsidios sociales. En segundo lugar, algunos autores subrayan la importancia de la política en la formación de los estados del bienestar, aunque principalmente sitúan la causa de los alineamientos políticos en las constelaciones contingentes de temas políticos en torno a los que se movilizan los grupos de interés, antes que en la configuración competitiva de los partidos políticos (por ejemplo, Pierson, 1994, 2001). Los gobiernos promulgan la reforma de la política social en función de la distribución de los costes y beneficios entre los grupos de interés político-económicos movilizados que fueron creados por las reformas anteriores de la política social. En tercer lugar, hay teorías de los *veto-points* políticos e institucionales que explican la diferente velocidad de la reforma política al margen de las constelaciones políticas partidistas (por ejemplo, Bonoli, 2001).

La literatura que rivaliza con la anterior en la explicación de los recortes en los estados del bienestar y subraya la política partidista, se divide principalmente en tres corrientes. Primero, están aquellos que afirman la continuidad de la influencia de las explicaciones convencionales, en términos izquierda-derecha, de la responsabilidad del partido que gobierna sobre la política social. Allí donde el centro de gravedad del partido (coalición) de gobierno esté más inclinado hacia partidos de izquierdas socialmente redistributivos, habrá menos recortes en el estado del bienestar —en el sentido de reducciones de los derechos a beneficios sociales de los ciudadanos— que allí donde el centro de gravedad sea económicamente liberal y derechista y promueva restricciones severas en política social (cfr. Korpi y Palme, 2001; Allen y Scruggs, 2003). Realmente la globalización ha precipitado recortes en política social que sólo dependían de los sectores partidistas conservadores y económicamente liberales de las democracias pluralistas, sin la intermediación de los intereses económicos corporatistas, centralizados y genéricos que hay entre las clases sociales (Swank, 2002). En segundo lugar, están quienes ven efectos permanentes de los partidos en la estabilidad de las diferencias internacionales en las políticas sociales del estado del bienestar, y unos efectos de los partidos débiles y menores sobre los ritmos de cambio en la política social, tal y como se observa en los niveles de gasto en política social controlados por el peso del problema demográfico y económico (Iversen y Cusak, 2000; Huber y Stephens, 2001).

En tercer y último lugar, están aquellos que quieren reconceptualizar el gobierno de los partidos y sus efectos sobre la política social en función de la interacción entre los partidos gobernantes y de oposición, que abre y cierra las oportunidades para la reforma de la política social según una relación no directamente lineal con la actuación económica del gobierno según el eje izquierda-derecha (cfr. Visser y Hemerijk, 1997; Hemerijk y Schludi, 2000; Kitschelt, 2001; Green-Pedersen, 2002 y 2003). Bajo estas consideraciones, incluso los partidos de izquierdas socialdemócratas que están en el gobierno asumirán los recortes del estado del bienestar, a condición de que sus principales competidores en la oposición no tengan la reputación de edificadores de estados del bienestar extensos y ofrezcan diferentes programas de recortes en política social más liberales en términos económicos. Este es el único caso en el que el principal rival de la socialdemocracia es un partido liberal en lo económico, conservador y laico y/o en el que los tradicionales partidos demócrata-cristianos económicamente centristas, o partidos laicos conservadores, han empezado a abandonar su tradicional mensaje electoral basado en el apoyo a políticas sociales universales y moderadamente redistributivas. Como ya se comentó en la segunda sección, este cambio de rumbo estratégico puede iniciarse cuando la diferenciación de las preferencias socioculturales y económicas deshace las viejas coaliciones electorales, amalgamadas bajo el paraguas de partidos centristas, y les obliga a reconocer que todas sus opciones programáticas implican serios juegos de equilibrios y compensaciones entre su potencial electorado.

Además, la fortaleza de los nuevos partidos de oposición izquierdista-liberales o derechista-autoritarios puede afectar a los juegos de compensaciones electorales que afrontan los gobiernos de partidos a la hora de decidir entre opciones alternativas sobre política social. Los demócrata-cristianos y otros partidos centristas y conservadores que tienen en su historial la expansión de los beneficios de las políticas sociales, y especialmente de los de sistemas de pensiones y de sanidad pública de que disfruta la gente mayor, aparcan las reformas económicas profundas cuando sus competidores en la derecha liberal de mercado o en la nueva derecha autoritaria son débiles y sus competidores socialdemócratas en la izquierda tienen un historial creíble, cuando han actuado como partidos de gobierno, de expansión del estado del bienestar. Los gobiernos socialdemócratas, a su vez, se sienten más constreñidos ante las reformas de recortes en política social cuando un partido centrista de la oposición que es electoralmente fuerte promete restituir las reducciones en las políticas sociales, adelantando por la izquierda al partido de gobierno, y/o cuando partidos izquierdista-liberales, electoralmente creíbles, amenazan con llevarse a una buena parte de los votantes del partido socialdemócrata que quedarían desencantados si se produjera un recorte importante en política social. El efecto del gobierno de los partidos en la economía política depende, por lo tanto, de las alternativas estratégicas que se ofrecen a los electores en la constelación particular del sistema de partidos.

Las restrictivas condiciones económicas vigentes desde el fin de la *Época Dorada* del crecimiento económico tras la Segunda Guerra Mundial, pueden haber influido marginalmente sobre la tendencia al declive en la satisfacción ciudadana con las instituciones democráticas y sobre el angostamiento de los grados de libertad de los que gozan los partidos políticos para ejercer un gobierno responsable ante los ciudadanos. Sin embargo, la literatura sobre la reducción del estado del bienestar muestra que puede ser que esto no represente el final de la política de partidos. La política de partidos tradicional puede persistir de un modo diluido o puede funcionar mediante cálculos estratégicos más complejos por parte de los políticos, controlando las alternativas políticas ofrecidas por sus competidores en el espacio de los temas políticos que son relevantes. Incluso bajo condiciones económicas alteradas, el gobierno responsable de los partidos deja su impronta en el ejercicio práctico del gobierno democrático.

V. LA DIFERENCIACIÓN POLÍTICA MÁS ALLÁ DE LOS PARTIDOS

En la primera sección de este artículo, que giraba en torno a la formación exógena de las preferencias políticas, se ha criticado implícitamente, a pesar de que luego todavía se ha asumido en otras secciones, el supuesto de que la política democrática, tal y como la perciben los ciudadanos, gira principalmente en torno a la captura de asientos y puestos en el legislativo y el ejecutivo por parte de equipos formados por agentes políticos ambiciosos que se coordinan bajo las siglas de partidos que compiten entre sí. Como Dalton ha sostenido en muchas publicaciones (por ejemplo, en Dalton y Wattenberg, 2000), ésta puede ser una visión demasiado estrecha de la política democrática. A medida que aumenta la capacidad de participación de ciertas minorías críticas del electorado, esos ciudadanos descubren la complementariedad y la parcial sustituibilidad de los diferentes modos de actuación política a través de las elecciones y los partidos, los grupos de interés y los movimientos de protesta política.

En la política democrática de masas de las postrimerías del siglo XIX y de los primeros dos tercios del siglo XX, los modos de articulación política mediante los partidos, los grupos de interés y los movimientos sociales estaban fundidos sólidamente, como se puede ilustrar con el ascenso y la caída de los “pilares” o “segmentos” políticos demócrata-cristianos, socialdemócratas, comunistas o agrarios. Los grupos de interés y los partidos tenían un estrecho vínculo mutuo, tomando unos u otros la iniciativa en las etapas formativas de uno de esos segmentos políticos. Los partidos políticos, cooperando con los grupos de interés afiliados, también eran los principales organizadores de los movimientos sociales y los actos de protesta política. Esta fusión entre la organización del partido, el grupo de interés y el movimiento social, fue promovida a veces por prácticas clientelistas cerradas, entendidas éstas como relaciones directas de intercambio material entre principales y agentes, en las que los políticos obtenían votos y beneficios

materiales del electorado a cambio de recursos materiales del Estado en forma de recompensas selectivas (por ejemplo, empleos en el sector público, concesión de contratos, vivienda pública, etc.) y de creación de situaciones ventajosas (por ejemplo, estableciendo regulaciones que lo favorecen). A veces, los partidos lograban esta fusión sin el clientelismo basado en redes asociativas sino más bien con incentivos sociales pensados y diseñados para cimentar la vinculación ciudadana con los sectores políticos tradicionales.

Fuera de los Estados Unidos —donde el prematuro sufragio universal masculino promovió políticas clientelistas, aunque luego se desmoronaron ante el movimiento progresista anticlientelista de principios del siglo xx, que no topó contra la oposición de redes clientelistas extensas y organizadas—, antes de la década de 1970 las sociedades democráticas raramente producían movimientos sociales y grupos de interés que actuaran en dominios que estuvieran al margen de los gobiernos de los partidos. A pesar de la, a veces vasta, escala organizativa y la capacidad de movilizar a los afiliados para las elecciones o manifestaciones públicas, por regla general fueron cuadros muy pequeños de políticos profesionales los que dominaron estos sectores políticos y organizaciones fragmentadas, mientras que la gran mayoría de sus miembros carecían del material y las capacidades cognitivas necesarias para una participación política autónoma y eficaz ¹².

La fusión de movimientos sociales, grupos de interés y partidos sólo empieza a desenredarse en el último tercio del siglo xx, cuando unas mayores capacidades para la participación política posibilitan que una parte más importante de la ciudadanía se implique en la participación política a partir de un proceso reflexivo, deliberativo y, por lo tanto, autónomo en el que también elige entre formas de movilización política alternativas. Antes de la década de 1960 los partidos, los grupos de interés y los movimientos sociales podían tener reivindicaciones políticas similares, pero los tres se diferenciaban porque se movilizaban en contextos institucionales diferentes, con los partidos actuando en los espacios electoral, legislativo y ejecutivo, los grupos de interés en espacios de negociación con otros grupos, partidos y miembros del ejecutivo, y los movimientos sociales en el espacio de la política a nivel popular. Desde la década de 1960, y en relación con la reconfiguración de las preferencias políticas comentada arriba, la naturaleza de las reivindicaciones y de los espacios institucionales ha ido diferenciando progresivamente a los movimientos, los grupos de interés y los partidos como vehículos para la participación política. Esta diferenciación puede ser reconstruida desde la *lógica de los costes de transacción para las diferentes inversiones en la acción colectiva desde la perspectiva de los empresarios políticos y los cuadros que se encargan de las causas políticas* ¹³.

12. Induciría a error equiparar la gran afiliación de organizaciones políticas (por ejemplo, a partidos socialistas o demócrata-cristianos) con unos niveles elevados de participación política. La afiliación a partidos y los niveles de participación efectiva pueden variar independientemente el uno del otro, cuando no están correlacionados negativamente.

13. Dejo de lado, naturalmente, el problema general de la acción colectiva sobre la creación de incentivos selectivos para cualquier forma de participación política.

Los movimientos sociales, en tanto que política de protesta a nivel popular, se forman alrededor de reivindicaciones y causas que ni son temporalmente duraderas ni tienen una interdependencia sustantiva entre diferentes temas políticos. Estos movimientos de objetivo político único pueden reunir a muchos seguidores precisamente porque reducen las opciones para conseguir el acuerdo necesario entre los potenciales partidarios al centrarse en un único tema, y al promover peticiones negativas a las autoridades políticas y grupos poderosos de la sociedad antes que alternativas políticas constructivas. Mientras las reivindicaciones de los movimientos sean temporalmente intermitentes y sustantivamente independientes de otras causas, los empresarios políticos prácticamente no invertirán en la estructura organizativa y administrativa para sostener la movilización en torno a la causa, ni en la resolución de conflictos y la elección colectiva para desarrollar un vínculo entre la estrecha demanda operativa del movimiento y otros temas políticos de movilización ciudadana. Los empresarios políticos sólo asumirán tales inversiones cuando las reivindicaciones del movimiento sean generalizables en una dimensión política temporal y/o sustantiva. La posibilidad de la generalización temporal de las reivindicaciones políticas da lugar a que los empresarios políticos inviertan en la estructura administrativa de una causa política, por ejemplo con una regulación para las organizaciones que defina un régimen de gobierno interno con papeles políticos diferenciados según el cual el esfuerzo de llevar a cabo la movilización se delegue en cuadros especializados. Esto daría como resultado la construcción de grupos de interés. La posibilidad de generalizar las reivindicaciones más allá del dominio de un único tema permite que los actores se coordinen alrededor de un programa político más amplio, combinando posiciones respecto a muchos temas, mientras evitan el problema interno de la elección social y las mayorías cambiantes. Muchos participantes pueden encontrar que tienen lo bastante en común sobre una gran variedad de temas políticos relevantes como para permanecer fieles al esfuerzo movilizador, incluso no estando de acuerdo con la postura del colectivo en algunos temas individuales. Si los empresarios políticos le auguran un buen futuro a la generalización de las reivindicaciones políticas a través de los distintos temas políticos, es posible que inviertan en los procedimientos formales de toma de decisiones colectivas, en la resolución de conflictos y en la agregación de intereses que dan como resultado la formación de partidos políticos.

Mientras haya muchos temas políticos únicos y limitados temporalmente que llamen a la movilización política de los movimientos sociales, sólo raramente se cumplirán las condiciones de posibilidad de generalización temporal y sustantiva de los temas políticos para que una causa consiga escalar del esfuerzo asociativo al nivel de la formación de un grupo de interés mediante la creación de una estructura organizativa, y no digamos ya al nivel de un partido político mediante la inversión en procedimientos de resolución de conflictos. Las alianzas electorales coordinadas alrededor de temas políticos únicos y aislados, sean o no sean temporalmente duraderas, están condenadas al fracaso. Abundan los ejemplos recientes que ilustran el destino de este tipo de partidos que no gene-

ralizan los temas políticos. Se paralizan a sí mismos tan pronto como se ven obligados a tratar temas de la agenda política que van más allá de la esencia de su única preocupación. Los partidos verdes han seguido siendo electoralmente irrelevantes siempre que no se han definido en términos programáticos amplios, por ejemplo como izquierdista-liberales, creyendo que podían competir en función del tema exclusivo de la ecología. Algunos ejemplos de ello son los ecologistas de Francia en la década de 1980 o los suecos hasta el fracaso del partido en 1992. Un porvenir parecido les espera a los partidos de jubilados de los Países Bajos y al más reciente partido de Pim Fortuyn, un mejunje de ideas y orientaciones políticas que no se han ordenado más allá del sentimiento compartido entre sus seguidores de que la cultura islámica no tiene cabida en Europa occidental. En otras partes, los incipientes partidos derechista-autoritarios no pudieron lograr el éxito electoral cuando se coordinaron alrededor de un único tema político, como la oposición a unos impuestos elevados en la Escandinavia de principios de la década de 1970. Hay muchas causas con un potencial limitado para su generalización programática, como el género, que sólo indirectamente y de forma estadísticamente probabilista sirven para la formación de grupos de interés duradero o partidos prósperos electoralmente. Podemos observar que en las sociedades postindustriales que tienen estados del bienestar extensos y grandes sectores de empleo público, los partidos izquierdista-liberales atraen a muchas más mujeres que los derechista-autoritarios, pero pocos empresarios políticos ambiciosos extraerán de esta regularidad empírica la expectativa, teóricamente errónea, de que podrían crear un partido de mujeres próspero. Inversamente, los empresarios políticos de movimientos y grupos de interés feministas no querrán atar su porvenir político a aquellos partidos políticos que incorporan posturas feministas en los temas políticos porque menoscabarían el apoyo de las mujeres que no comparten las posiciones programáticas de aquellos partidos sobre temas que sólo están vagamente relacionados con el género o no lo están en absoluto.

Una perspectiva del coste de transacción sobre la diferenciación de los modos de participación política concuerda, de este modo, con varios de los fenómenos observados empíricamente en muchas sociedades postindustriales. Primero, el declive de la participación electoral no refleja un declive del interés por la política o de la predisposición a participar. A menudo viene acompañado de una intensificación de las actividades de los movimientos sociales o los grupos de interés. Empíricamente es incorrecto afirmar que hubiera un declive general de los movimientos sociales después de las movilizaciones espectacularmente grandes de algunos movimientos sociales de protesta, como los movimientos contra las centrales nucleares y los movimientos por el desarme nuclear de la década de 1970 y principios de la de 1980. Muy al contrario, las investigaciones empíricas sobre el perfil de las protestas muestran una difusión de las prácticas de los movimientos sociales a través de una variedad de temas políticos a nivel local, regional, nacional o supranacional (cfr. Rucht, 2002, 2003).

En segundo lugar, el descenso casi universal de la afiliación a partidos políticos nos dice poco acerca de la vitalidad de los procesos participativos de agregación de intereses a través de los partidos políticos (cfr. Scarrow, 2000). La pérdida de miembros de los partidos se debe principalmente a la salida, o a la no entrada, de grupos sociales cuyos intereses podrían ser representados por los partidos pero la mayoría de cuyos miembros no tiene las capacidades necesarias para involucrarse activamente en el proceso interno de articulación y agregación de intereses de los partidos. Este es el caso de los ciudadanos que tienen unos niveles educativos bajos, especialmente los asalariados poco cualificados de cuello azul y cuello blanco, y de quienes se ocupan de las labores del hogar (principalmente mujeres, amas de casa). Aunque esos individuos sólo estén ligeramente menos inclinados a participar en las elecciones que otros sectores sociales del electorado, suponiendo que los costes para registrarse y participar sean insignificantes, su implicación en otros modos de participación más exigentes, como la participación activa con partidos políticos, grupos de interés o actos de protesta disminuirá drásticamente en comparación con los individuos que tienen más recursos cognitivos. Sin embargo, no hay ninguna evidencia sistemática de que el tamaño relativo de las pequeñas minorías de individuos competentes que participan activamente en la vida de los partidos políticos haya disminuido en general durante las últimas décadas ¹⁴.

En tercer lugar, los movimientos sociales y los grupos de interés cada vez están menos dispuestos a crear vínculos estrechos con los partidos políticos e incluso, cuando esos vínculos existen, intentan hacerlos más flexibles y holgados. Éste es el caso, en las democracias corporatistas, de los esfuerzos de los líderes sindicales y los políticos de partidos socialdemócratas para poner distancia entre sus respectivas organizaciones, y también de los movimientos y grupos de interés ecologistas cuyos líderes se resisten a la subordinación a los partidos verdes o ecologistas por temor a dividir a su propio electorado en función de unas líneas ideológicas que no están totalmente al lado de la protección medioambiental. El resultado de estas consideraciones es que, en la política democrática de las sociedades postindustriales, los partidos políticos no son irrelevantes sino que están confinados en un lugar mucho más estrecho. Los políticos tienen que dedicar más energías y reflexiones para encontrar nichos en los que la movilización de los partidos políticos disfrute de ventajas relativas frente al uso de otros vehículos disponibles para la articulación de intereses.

14. Naturalmente, esto no significa que los niveles de la participación intrapartidista no varíen entre partidos, familias de partidos y comunidades políticas en función de las posiciones estratégicas y el atractivo electoral de sus líderes.

VI. CONCLUSIONES

Mi rodeo para interpretar la dinámica de los partidos y sistemas de partidos en la política postindustrial se puede sintetizar en un par de metáforas económicas: de los grandes almacenes a las tiendas especializadas, pues las demandas de los consumidores se han vuelto más exigentes; de la estructura diversificada de tareas en los *holdings* a una concentración en “capacidades básicas principales” y ventajas comparativas, pues muchas actividades están fuera del ámbito de las organizaciones partidistas y provocan una disipación ineficiente de los recursos.

Puesto que los partidos participan en juegos institucionales de representación territorial en los que los políticos electos tienen un control limitado de la agenda, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, y deben representar a los ciudadanos ante un abanico variable de temas, están condenados a centrarse en aquellos temas del programa que están “conectados” entre sí dentro de la vasta agenda de principios político-económicos y socioculturales que los políticos utilizan para resolver los problemas de elección social. Todos aquellos temas que no se pueden relacionar fácilmente con una o dos dimensiones de la diversificación programática del sistema de partidos, deben delegarse a grupos de interés y movimientos sociales que se mueven en un juego político de ámbito más restringido y que, por lo tanto, tienen mayores facilidades que los partidos para atraer a coaliciones de ciudadanos más grandes.

Además, puesto que las condiciones para la conexión entre temas distributivos y socioculturales cambian y se diversifican, hay una tendencia a que los partidos afronten juegos de compensaciones de electores más pronunciados y a que se vean forzados a abrirse camino entre un electorado más reducido, mejor definido y, posiblemente más volátil. Mientras los grandes partidos que captaban más del 40 por 100 del mercado electoral de cualquier sociedad solían ser comunes en muchas democracias durante la Época Dorada del capitalismo de la segunda postguerra mundial, actualmente son una excepción. La tendencia hacia la diversificación ha sido mayor en sistemas políticos con umbrales electorales relativamente bajos, y también con niveles bajos de fragmentación del sistema de partidos. En los sistemas políticos de representación proporcional que ya tenían niveles altos de fragmentación y en los que tienen normativas electorales restrictivas, especialmente con sistemas de distrito uninominal con fórmula de mayoría simple, esta diferenciación partidista se da en menor grado y a un ritmo más lento.

La especialización y diferenciación funcionales que se han postulado sobre el rol de los partidos en los sistemas políticos postindustriales apuntan, en varios sentidos, justamente a lo opuesto de lo que sostienen que ha sucedido los teóricos de la “desalineación partidista”. En lugar de una creciente aleatoriedad en las relaciones entre la experiencia sociocultural y en el mercado de los ciudadanos, las preferencias políticas

y la elección partidista, yo esperaría un reforzamiento del vínculo entre las condiciones socioculturales de la formación de las preferencias de los ciudadanos, su articulación real de las posiciones de los temas políticos y la elección de partidos en un campo de competidores diferenciado programáticamente. Históricamente, los partidos *catch all* nunca llegaron a existir más que en la imaginación de los antiguos y desilusionados partidarios de la política de clases revolucionaria, por un lado, y en la imaginación de entusiastas ideológicos del capitalismo de la postguerra, al estilo de la ciencia social funcionalista que postuló el fin del conflicto social y el advenimiento de una era de consenso. A finales del siglo xx y principios del siglo xxi, el angostamiento del espacio de lo viable política y económicamente —restringido por la globalización de los mercados de capitales, el premio que otorga la innovación tecnológica a las inversiones en capital humano elevado y versátil, y la revolución demográfica de los ancianos— puede sugerir un aparentemente inevitable ascenso de los partidos *catch-all*. Sin embargo, lo que contrarresta este desarrollo es la diferenciación de los intereses político-económicos y socioculturales en las sociedades postindustriales. Un aspecto que está combinado con el aumento de las capacidades de minorías electorales crecientes para controlar y procesar información sobre la política democrática y para participar en la articulación de los intereses políticos de una forma altamente sofisticada y estratégicamente premeditada.

Referencias

- Allan, James P., y Lyle Scruggs. 2003. *Political partisanship and welfare state reform in advanced industrial societies*, artículo en proceso de revisión. Department of Political Science, University of Connecticut.
- Alt, James, Jeffrey Frieden, Michael J. Gilligan, Dani Rodrik, y Ronald Rogowski. 1996. «The political economy of international trade. Enduring puzzles and an agenda for inquiry», *Comparative Political Studies*, 29 (6): 689-717.
- Bonoli, Giulano. 2001. «Political institutions, veto points, and the process of welfare state adaptation», en Paul Pierson, ed., *The new politics of the welfare state*, pp. 238-264. Oxford: Oxford University Press.
- Cox, Gary. 1997. *Making votes count*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dalton, Russell J. 1999. «Political support in advanced industrial democracies», en Pippa Norris, ed., *Critical citizens. Global support for democratic Government*, pp. 57-77. Oxford: Oxford University Press.
- Dalton, Russell J., y Martin P. Wattenberg, eds. *Parties without partisans. Political change in advanced industrial democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Downs, Anthony. 1957. *Economic theory of democracy*. Nueva York: Harper.

- Erickson, Robert, Michael B. McKuen, y James A. Stimson. 2002. *The macro polity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1990. *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Esping-Andersen, Gøsta. 1999. *Social foundations of postindustrial economies*. Oxford: Oxford University Press.
- Estevez-Abe, Margarita, Torben Iversen, y David Soskice. 2001. «Social protection and the formation of skills: A reinterpretation of the welfare state», en Peter A. Hall y David Soskice, eds., *Varieties of capitalism. The institutional foundations of comparative advantage*, pp. 145-83. Oxford: Oxford University Press.
- Flanagan, Scott C., y Aie-Rie Lee. 2003. «The new politics, culture wars and the authoritarian-libertarian value change in advanced industrial democracies», *Comparative Political Studies*, 36 (3): 235-270.
- Frieden, Jeffrey A., y Ronald Rogowski. 1996. «The impact of the international economy on national policies: An analytical overview», en Robert O. Keohane y Helen V. Milner, eds., *Internationalization and domestic politics*, pp. 25-47. Cambridge: Cambridge University Press.
- Green-Pedersen, Christoffer. 2002. *The politics of justification. Party competition and welfare-state retrenchment in Denmark and the Netherlands from 1982 to 1998*. Amsterdam: Amsterdam University Press. 207 pp.
- Green-Pedersen, Christoffer. 2003. «Small states, big success. Party politics and governing the economy in Denmark and the Netherlands from 1973 to 2000», *Socio-Economic Review*, 1 (3): 411-437.
- Hemerijk, Anton C., y Martin Schludi. 2000. «Sequences of policy failures and effective policy responses», en Fritz W. Scharpf y Vivien A. Schmidt, *Welfare and work in the open economy*. vol. 1, pp. 125-228. Oxford: Oxford University Press.
- Huber, Evelyne, y John D. Stephens. 2001. *Development and crisis of the welfare state: Parties and policies in global markets*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hug, Simon. 2001. *Altering party systems. Strategic behavior and the emergence of new political parties in Western democracies*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Iversen, Torben, y Thomas R. Cusak. 2000. «The causes of welfare state expansion. Deindustrialization or globalization?», *World Politics*, 52 (3): 313-349.
- Iversen, Torben, y David Soskice. 2001. «An asset theory of social policy preferences», *American Political Science Review*, 95 (4): 875-884.
- Kirchheimer, Otto. 1966. «The transformation of the Western european party systems», en Joseph La-Palombara y Myron Weiner, eds., *Political parties and political development*, pp. 177-200. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Kitschelt, Herbert. 1988. «The rise of left-libertarian parties in Western democracies: Explaining innovation in competitive party systems», *World Politics*, 40 (2): 194-234.

- Kitschelt, Herbert. 1993. «Class structure and social democratic party strategy», *British Journal of Political Science*, 23: 299-337.
- Kitschelt, Herbert. 1994. *The transformation of European social democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kitschelt, Herbert. 1995. *The radical right in Western Europe* (en colaboración con Anthony J. McGann). Ann Arbor: Michigan University Press.
- Kitschelt, Herbert. 2000a. «State failure, political party and electorate. Changing relations of representation in West European politics», *European Journal of Political Research*, 37 (2): 149-179.
- Kitschelt, Herbert. 2000b. «Linkages between citizens and politicians in democratic politics», *Comparative Political Studies*, 33 (6-7): 845-879.
- Kitschelt, Herbert. 2001a. «Politische Konfliktlinien in westlichen Demokratien. Ethnisch-kulturelle und wirtschaftliche Verteilungskonflikte», en Wilhelm Heidtmeyer, ed., *Autoritäre Entwicklungen im Zeitalter der Globalisierung*, pp. 418-441. Frankfurt, Main: Suhrkamp.
- Kitschelt, Herbert. 2001b. «Partisan competition and welfare state retrenchment: When do politicians choose unpopular policies?», en Paul Pierson, ed., *The new politics of the welfare state*, pp. 265-302. Oxford: Oxford University Press.
- Kitschelt, Herbert. 2002a. «Popular dissatisfaction with democracy: Populism and party systems», en Yves Meny y Yves Surel, eds., *Democracies and the populist challenge*, pp. 179-196. Houndsmill, Basingstoke: Palgrave.
- Kitschelt, Herbert. 2002b. «Landscapes of political interest intermediation. Social movements, interest groups, and parties in the early twenty-first century», en Pedro Ibarra, ed., *Social movements and democracy*, pp. 81-104. Houndsmill, Basingstoke: Palgrave-MacMillan.
- Kitschelt, Herbert. 2003a. «Political economic context and partisan strategies in the German federal elections 1990-2002», *West European Politics*, 26 (4).
- Kitschelt, Herbert. 2003b. «The demise of clientelism in affluent capitalist democracies. A political-economic explanation», manuscrito. Department of Political Science, Duke University.
- Kitschelt, Herbert, y Anthony J. McGann. 2003. «Die Dynamik der schweizerischen Neuen Rechten in komparativer Perspektive: Die Alpenrepubliken», en Pascal Sciarini, Sibylle Hardmeier y Adrian Vetter, eds., *Schweizer Wahlen 1999*, pp. 183-216. Bern: Paul Haupt.
- Klingemann, Hans-Dieter. 1999. «Mapping political support in the 1990s: A global analysis», en Pippa Norris, ed., *Critical citizens. Global support for democratic government*, pp. 31-56. Oxford: Oxford University Press.
- Koole, Ruud. 1996. «Cadre, catch-all or cartel? A comment on the notion of the cartel party», *Party Politics*, 2 (4): 507-23.

- Korpi, Walter, y Joakim Palme. 2001. New politics and class politics in welfare state regress. A comparative analysis of retrenchment in 18 countries. 1975-1995. Trabajo presentado en el *Annual Meeting of the American Political Science Association*, San Francisco, 30 de agosto-3 de septiembre.
- Lipset, Seymour Martin. 1961/1982. *Political man*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2.^a ed.
- Lupia, Arthur, y Mathew D. McCubbins. 1998. *The democratic dilemma. Can citizens learn what they need to know?* Cambridge: Cambridge University Press.
- Mair, Peter. 1997. *Party system change. Approaches and interpretations*. Oxford: Oxford University Press.
- Merrill, Samuel III, y Bernard Grofman. 1999. *A unified theory of voting. Directional and proximity spatial models*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Michels, Robert. 1911/1962. *Political parties*. Nueva York: Free Press.
- Ordeshook, Peter. 1997. «The spatial analysis of elections and committees: Four decades of research», en Dennis C. Mueller, ed., *Perspectives on public choice. A handbook*, pp. 247-270. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pierson, Paul. 1994. *Dismantling the welfare state*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pierson, Paul. 2001. «Postindustrial pressures on the mature welfare states», en Paul Pierson, ed., *The new politics of the welfare state*, pp. 80-105. Oxford: Oxford University Press.
- Rogowski, Ronald. 1989. *Commerce and coalitions*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Rucht, Dieter. 2002. «Social movements challenging neo-liberal globalization», en Pedro Ibarra, ed., *Social movements and democracy*, pp. 211-228. Houndsmill, Basingstoke: Palgrave-MacMillan.
- Rucht, Dieter. 2003. «The changing role of political protest movements», *West European Politics*, 26 (4).
- Sainsbury, Diane, ed. 1999. *Gender and welfare state regimes*. Oxford: Oxford University Press.
- Scharpf, Fritz W. 2000. «Economic changes, vulnerabilities, and institutional capabilities», en Fritz W. Scharpf y Vivien A. Schmidt, *Welfare and work in the open economy. Volume 1. From vulnerability to competitiveness*, pp. 21-124. Oxford: Oxford University Press.
- Scarrow, Susan E. 2000. «Parties without members? Party organization in a changing electoral environment», en Russell J. Dalton y Martin P. Wattenberg, eds., *Parties without partisans. Political change in advanced industrial democracies*, pp. 79-101. Oxford: Oxford University Press.
- Swank, Duane. 2002. *Global capital, political institutions, and policy change in developed welfare states*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Visser, Jelle, y Anton Hemerijk. 1997. *A Dutch miracle*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Wright, Erik Olin. 1985. *Classes*. Londres: New Left Books.
- Wright, Erik Olin. 1997. *Class counts. Comparative studies in class analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zaller, John. 1992. *The nature and origins of mass opinion*. Cambridge: Cambridge University Press.

HERBERT KITSCHOLT

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke. Ph. D. por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Especializado en el estudio comparativo de los partidos políticos en democracias consolidadas y en nuevas democracias. Autor, entre otros muchos trabajos, de *Logics of party formation* (Cornell University Press, 1989); *Beyond the European left* (Duke University Press, 1990); *The transformation of European Social Democracy* (Cambridge University Press, 1994); *The radical right in Western Europe* (1995, en colaboración con Anthony J. McGann), y *Post-communist party systems. Competition, representation and inter-party cooperation* (Cambridge University Press, 1999), escrito con Zdenka Mansfeldova, Radoslaw Markowski y Gabor Toka.